



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

“La política pública orientada al control criminal y la eficacia de las  
sanciones por el delito de violación sexual”

Autora

Bach. Manay Dávila Leydi Luci

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Asesora

Mag. Colina Moreno Mary Isabel

LAMBAYEQUE, 2021

Primer Informe de la Tesis denominada “La política pública orientada al control criminal y la eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADA, por:

---

Bach. Manay Dávila Leydi Luci

Autora

---

Mag. Colina Moreno Mary Isabel

Asesora

Aprobada por:

---

Mag. Francisco Santiago Delgado Paredes  
Presidente

---

Mag. Carlos Manuel Antenor Cevallos de Barrenechea  
Secretario

---

Abog. Vargas Rodríguez Cesar  
Vocal

## **DEDICATORIA**

Dedico esta tesis a mi padre, Hernando Manay Montaña, quien siempre me apoya incondicionalmente, con su sabios consejos en los momentos de flaqueza, los cuales me ayudan en el transcurrir de mi vida, así como para poder concluir mi carrera universitaria con éxito.

A mi madre y hermanos, por el apoyo que siempre me brindaron día a día en el transcurso de cada año de mi carrera universitaria.

## **AGRADECIMIENTO**

En primer lugar, agradecer a Dios, ya que sin él en nuestras no podríamos lograr muchas cosas

Mi agradecimiento infinito a mi padre Hernando Manay Montaña, quien siempre está de manera incondicional presente en mi vida, así como en la de mis hermanos, quien supo apoyarme en todo momento para que pueda terminar esta carrera

Al personal académico y administrativo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quienes supieron impartir sus conocimientos con mucho esfuerzo, para hacer posible la preparación profesional.

## INDICE

DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO .....	iv
INDICE .....	v
Índice de Tablas .....	ix
Índice de Ilustraciones.....	x
RESUMEN.....	xi
ABSTRACT .....	xii
INTRODUCCIÓN .....	13
CAPITULO I.....	16
ASPECTOS METODOLÓGICOS .....	16
1.1. Realidad Problemática:.....	16
1.1.1. Planteamiento del Problema .....	16
1.1.2. Formulación del Problema.....	18
1.2. Justificación e Importancia del Estudio.....	18
1.2.1. Justificación del Estudio .....	18
1.2.2. Importancia del Estudio .....	20
1.3. Objetivos .....	20
1.3.1. Objetivo General.....	20
1.3.2. Objetivos Específicos .....	20

1.4. Hipótesis .....	21
1.5. Variables.....	21
1.5.1. Variable Independiente .....	21
1.5.2. Variable Dependiente .....	21
1.6. Métodos .....	22
1.6.1. Métodos .....	22
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico:.....	22
1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico .....	23
1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo .....	23
1.6.1.4. Método Inductivo .....	24
CAPITULO II .....	26
LA TEORÍA DE LOS FINES DE LA PENA EN LA DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL.....	26
2.1. Trabajos previos a la investigación .....	26
2.2. La pena en el derecho comparado .....	32
2.3. Los fines de la pena .....	33
2.4. Crítica al fin preventivo de la pena.....	38
CAPITULO III .....	43
LA POLÍTICA PÚBLICA CONTRA EL CRIMEN EN EL PERÚ .....	43
<b>3.1. La teoría de las políticas públicas. ....</b>	<b>43</b>
<b>3.2. El origen de la política pública .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3. Eficacia de la política pública en la lucha contra el crimen ..</b>	<b>49</b>

Capítulo IV .....	51
Análisis y resultados.....	51
4.1. Resultados estadísticos: .....	51
4.2. Resultados de opinión .....	54
CAPITULO V .....	72
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS .....	72
5.1. Discusión de los resultados. ....	72
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la teoría de los fines de la pena en la doctrina penal nacional e internacional” .....	72
5.1.2. Discusión sobre: “Describir la estructura de la política pública de lucha contra el crimen en el Perú desde una perspectiva crítica del desarrollo del control criminal” .....	77
5.1.3. Discusión sobre: “Analizar la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual en el distrito judicial de Lambayeque y su efecto en los índices de criminalidad” .....	81
5.1.4. Discusión sobre: “Proponer un lineamiento estratégico para determinar la realidad problemática a través de la criminología, a fin de generar una política pública eficiente sobre el control de los índices de violación sexual” .....	85
5.2. Las variables y su validación.....	90
5.2.1. Sobre la variable independiente: “La política pública orientada al control criminal” .....	90

5.2.2. Sobre la variable dependiente: “La eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual”.....	93
5.3. Contrastación de hipótesis.....	95
CONCLUSIONES .....	98
Recomendaciones.....	102
Bibliografía.....	103
ANEXOS.....	107
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ..	107

## Índice de Tablas

Tabla 1: cuadro de la tabulación de resultados estadísticos recopilados de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre 2016 y 2020 respecto al tipo penal de violación sexual. ....	52
Tabla 2: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1. ....	55
Tabla 3: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2. ....	58
Tabla 4: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3. ....	61
Tabla 5: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4. ....	64
Tabla 6: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5. ....	67
Tabla 7: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6. ....	70

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Gráfica porcentual de la incidencia de las modalidades de violación sexual en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre los años 2016 al 2020.....	53
Ilustración 2: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1.....	56
Ilustración 3: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2.....	59
Ilustración 4: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3.....	62
Ilustración 5: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4.....	65
Ilustración 6: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5.....	68
Ilustración 7: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6.....	71

## **RESUMEN**

Bajo la óptica de eficacia de la criminalización respecto de los actos de violencia sexual en el Perú, es de fácil verificación la ausencia de capacidad de las políticas públicas que se ocupan del desarrollo de estrategias con el fin de alcanzar la reducción de los índices de criminalidad, que para el caso específico de la agresión sexual se limita a la aplicación de sanciones sin un orden lógico de penalización, lo cual conlleva a la acción incompleta del derecho penal en algunos casos. la idea de una política pública adecuada es que contenga un enfoque social que se oriente a la garantía de los derechos que se supone son asegurados en los procesos penales, instaurados en razón de la identificación de acciones ilícitas; es decir, debe dejarse de lado la orientación dirigida a la seguridad para convertirse en políticas garantistas y así coincidir con la finalidad preventiva del derecho penal. agotar con la medidas previas, antes de la aplicación de la sanción con el fin de reducir los índices de la criminalidad, debería ser el sentido más adecuado de las políticas públicas en atención al principio de la última ratio del derecho penal y que en tanto éste tenga lugar para accionar se encuentre dotado de sanciones adecuadas y proporcionales al daño producido.

**Palabras Claves: Política pública, Control criminal, Sanciones, Violación sexual.**

## **ABSTRACT**

From the perspective of the effectiveness of criminalization regarding acts of sexual violence in Peru, it is easy to verify the lack of capacity of public policies that deal with the development of strategies in order to achieve the reduction of crime rates, which for the specific case of sexual assault is limited to the application of sanctions without a logical order of penalization, which leads to incomplete action of criminal law in some cases. The idea of an adequate public policy is that it contains a social approach that is oriented towards guaranteeing the rights that are supposed to be ensured in criminal proceedings, established by reason of the identification of illegal actions; In other words, the orientation directed to security must be put aside to become guarantee policies and thus coincide with the preventive purpose of criminal law. To exhaust with the previous measures, before the application of the sanction in order to reduce the crime rates, should be the most appropriate sense of public policies in attention to the principle of the last ratio of criminal law and that as long as it takes place to act is endowed with appropriate sanctions proportional to the damage produced.

**Keywords: Public policy, Criminal control, Sanctions, Rape.**

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de esta tesis titulada “La política pública orientada al control criminal y la eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual”, se orienta al reconocimiento de la real efectividad que se tiene sobre la aplicación de las políticas públicas en el sistema de control que ejerce el Estado respecto a la actividad criminal que se desarrolla en la sociedad. En ese sentido la formulación del problema que se plantea como origen del problema es: ¿Cuán apropiada resulta la estructura de la política pública para lograr la eficacia de la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual?

Para conseguir la respuesta más apropiada a esta investigación se han tenido en cuenta consideraciones específicas de las fuentes doctrinarias del derecho, esto es la base jurídica que permitió la comprensión de la verdadera finalidad de la intervención del derecho a través del Ius Puniendi del Estado, como así se entiende la función o fines de las sanciones que se aplican en el Derecho Penal; sobre todo en lo que corresponde al delito de Violación de la Libertad Sexual como bien jurídico que se protege.

Esta percepción permitió reconocer en función a los antecedentes que se han realizado como trabajos previos sobre este tema, una realidad que no supera la expectativa social de la prevención y el equilibrio de la sociedad, que se identifica como la seguridad jurídica que otorgan las garantías que se supone deben estar plasmadas en el contenido legislativo sancionador.

En base a ello es que se logró establecer la relación con la estructura de control generada por el Estado en base a las políticas públicas, puesto que se

entiende deben estar construidas en función a la identificación de la realidad social que conllevará a la estructuración de reglas específicas que permitan al ordenamiento jurídico generar un sistema de justicia adecuado, esto es que no se enfoque sólo en la criminalización de las acciones delictivas con el afán de castigar, sino que se consoliden los fines de la pena, esto es lograr la resocialización del delincuente. El problema que se identifica es que no necesariamente se cumple con dicho fin, sumándose a ello la idea de que la prevención como resultado de la aplicación de la política pública es casi nula, puesto que los casos que se producen van en aumento y siempre son en virtud de los tipos base o más generales.

Siendo así, la estructura de la investigación se proyectó bajo un modelo no experimental que haciendo un análisis cualitativo de la realidad, se proyectó para el esquema de la metodología de investigación que se contempla en el Capítulo I de la tesis, donde se diseña la estructura que ha seguido el desarrollo de la tesis, esto implica desde la construcción de la formulación del problema hasta el establecimiento de las variables que dan el sentido lógico del trabajo y que conllevará al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones.

En el Capítulo segundo se ha incorporado el material teórico necesario a fin de comprender con claridad los fines de la pena, esto es la realidad función que representa la acción del ius puniendi del Estado, en tanto se comprende como su obligación de control sobre las acciones criminales. Así es como se logró consolidar la verdadera finalidad de la aplicación de las penas que no necesariamente tienen un fin preventivo de manera directa, lo cual no justifica su utilización por parte del Estado como la primera medida de acción.

Para la construcción del Capítulo tercero se ha tenido en cuenta la teoría que representa la política pública en la estructura del Estado peruano, así pues importará

la condición del manejo de parte del Estado respecto a la criminalidad, a fin de establecer un control específico que se traduzca en el efecto preventivo de la acción delincuencia sobre todo en lo que respecta a la estrategia que se ha diseñado legislativamente para los efectos sobre el delito de violación sexual. De acuerdo a ello es que se establece una línea de observación sobre los efectos que ha tenido esta configuración, obteniendo un resultado poco alentador, dado que el índice criminal siempre va en aumento.

En lo que corresponde al Capítulo cuarto, se ha estructurado la secuencia de observación de la realidad, lo cual se divide en dos secciones, la primera sobre el resultado del análisis estadístico mediante el cual se muestra el nivel de incidencia sobre este tipo de delito en la realidad jurisdiccional de la ciudad de Chiclayo. De otro lado se tiene el reconocimiento de las posturas por parte de los expertos en el área del Derecho Penal, esto es la aplicación de una encuesta de opinión a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo, mediante la cual se han podido validar en su mayoría todas las posturas de la investigación.

Para lo que se refiere a la construcción del Capítulo quinto se ha tenido en composición de la estructura mediante la discusión que se desarrolló en función a los contenidos de cada uno de los objetivos específicos planteados como metas de la investigación, tales resultados se asumieron como tomas de postura cuya síntesis permitió establecer la validación de cada una de las variables que se convierten luego en la determinación final, permitiendo así la contrastación de la hipótesis y la construcción de las conclusiones y recomendaciones que ahora se ponen al juicio de los miembros del jurado que evalúa el estudio.

La Autora.

## **CAPITULO I**

### **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

#### **1.1. Realidad Problemática:**

##### **1.1.1. Planteamiento del Problema**

Bajo la óptica de eficacia de la criminalización respecto de los actos de violencia sexual en el Perú, es de fácil verificación la ausencia de capacidad de las políticas públicas que se ocupan del desarrollo de estrategias con el fin de alcanzar la reducción de los índices de criminalidad, que para el caso específico de la agresión sexual se limita a la aplicación de sanciones sin un orden lógico de penalización, lo cual conlleva a la acción incompleta del derecho penal en algunos casos.

Esta situación obedece sin duda a la forma en que se han estructurado a través de los últimos años, las políticas públicas que se orientan a la garantía que ofrece el Estado respecto a las acciones delictivas como es el caso de la violación sexual, situación que conlleva a índices de ineficacia de dicha acción, lo que se puede apreciar de los resultados estadísticos que indican como cifras de violación sexual en el Perú durante los años 2017 al 2019 un total de 3,024 casos producidos sobre mujeres y de 212 casos sobre hombres, lo que hace un total de 3,236 casos a nivel nacional. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019)

Como se puede apreciar, el resultado estadístico muestra una cifra bastante alta que corresponde al periodo estudiado, lo que implica un problema que se desarrolla en función a la ineficacia de la intervención del Estado, desde luego que

se complementa con ciertos factores sociales como es el caso de la influencia familiar lo cual se enlaza con el nivel de educación de los sectores donde se pueden observar mayor cantidad de casos sobre este tipo de acto ilícito.

En función a ello, se debe dejar en claro que la estructura de las políticas públicas, están basadas en estrategias que van seguir los gobiernos a través de la gestión que corresponda, siendo así, estas deben ser elucubradas en base a la percepción de la realidad, es decir, según lo señalado anteriormente tanto la formulación de estrategias de parte del Estado, así como la realidad social y cultural que le corresponderá estudiar a la criminología como ciencia.

La idea de una política pública adecuada es que contenga un enfoque social que se oriente a la garantía de los derechos que se supone son asegurados en los procesos penales, instaurados en razón de la identificación de acciones ilícitas; es decir, debe dejarse de lado la orientación dirigida a la seguridad para convertirse en políticas garantistas y así coincidir con la finalidad preventiva del derecho penal.

Agotar con la medidas previas, antes de la aplicación de la sanción con el fin de reducir los índices de la criminalidad, debería ser el sentido más adecuado de las políticas públicas en atención al principio de la última ratio del derecho penal y que en tanto éste tenga lugar para accionar, se encuentre dotado de sanciones adecuadas y proporcionales al daño producido.

Pese a todo ello, es importante señalar que la intervención del Estado, además de mesurada en función a los principios garantistas, debe tener en consideración una estrategia que se condiga con la realidad social, con el fin de evitar cambios que no necesariamente terminan asegurando la protección idónea del bien jurídico; para el caso estudiado la libertad sexual, debe ser analizada de

manera cautelosa antes de generar cambios legislativos que pudieran terminar perjudicando a las propias víctimas, e incluso generando impunidad.

Lo dicho se decanta de la situación generada, otrora, en la estructura legislativa que se ocupa de este delito, así pues, se llegó a generar la posibilidad del consentimiento como la eximente de la responsabilidad penal cuando fuera otorgada por un menor entre 14 y 18 años; postura que fue ampliamente criticada, no sólo por su origen, sino por los efectos que pudieron causar en la capacidad de los menores, generando un amplio margen de libertad que fuera aprovechado por los sujetos lumpen para cometer este tipo de actos antijurídicos.

Entre otros aspectos, esta crítica será la que oriente a la observación de cuan apropiada ha resultado la generación de políticas públicas con el fin de controlar la acción delictiva sobre el bien jurídico libertad sexual, con la intención de reconocer los aspectos fallidos y sobre ellos estructurar la propuesta de una política pública adecuada bajo la intervención de la criminología como ciencia para apoyar el reconocimiento de los factores que promueven el delito y actuar sobre ellos.

### **1.1.2. Formulación del Problema**

¿Cuán apropiada resulta la estructura de la política pública para lograr la eficacia de la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual?

## **1.2. Justificación e Importancia del Estudio**

### **1.2.1. Justificación del Estudio**

Socialmente se puede reconocer la justificación de esta proyección en razón de que el sentido de la organización estatal según el modelo que ostenta bajo la característica de constitucional y democrático de derecho, es la protección del grupo

social bajo los lineamientos garantistas que supone la construcción del ordenamiento penal.

Dicha característica requiere de la verificación de la eficacia de tal intervención, por lo mismo que se puede reconocer en su contexto un problema de insuficiencia para alcanzar tal fin, esto es que las políticas públicas diseñadas en función a la necesidad de acallar las voces de la opinión pública no resulta ser el camino más adecuado para conseguir lo que se espera como protección de parte del Estado.

De otro lado se puede reconocer una justificación de tipo legislativa, puesto que encadenada a la anterior justificación se encuentra el problema de la construcción de reglas proyectadas a establecer el control de la incursión delictiva respecto al tipo penal de violación sexual, así lo que interesa en el ordenamiento no sólo es aplicar el *ius puniendi* del Estado para que a través de la sanción se castigue al agresor sexual, sino se debe proyectar una de las finalidades de la pena, esto es la prevención.

Este último aspecto será una sección de bastante discusión en el desarrollo de la investigación puesto que en tanto la comprensión de la importancia de tal característica de la pena se comportará como el primer escalón del desarrollo académico, en segundo escaño estará la verificación de si efectivamente se cumple con esta cualidad y si realmente la política pública como orientadora de la construcción del ordenamiento, esta lo suficientemente dotada de un enfoque social que le permita proyectarse sobre el desarrollo del control social en beneficio de la comunidad.

### **1.2.2. Importancia del Estudio**

Sin duda alguna, la proyección de este tema es de ardua discusión, lo cual permite reconocer la importancia de su tratamiento, siendo la característica propia de esta investigación el hecho de orientar su observación desde la perspectiva de la política pública con el carácter de seguridad por sobre el aspecto que realmente interesa al derecho, la garantía de los derechos fundamentales por ende los principios generales del derecho y en su conjunto como consecuencia de ello dotar de seguridad jurídica y el efecto preventivo que se supone debería otorgar el resultado de la política que persigue la criminalidad.

Siendo así se puede considerar como los beneficiarios directos a todos los integrantes de la sociedad, puesto que la sugerencia de una orientación proteccionista y preventiva de la política pública supone la seguridad jurídica primero para luego con ello tener como resultado la seguridad ciudadana, sin saltarse del cumplimiento de los principios generales del derecho en la construcción de reglas orientadas más a castigar que a la disminución de los índices criminales.

## **1.3. Objetivos**

### **1.3.1. Objetivo General**

- Determinar si resulta apropiada la estructura de la política pública de control criminal para lograr la eficacia de la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual.

### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- Desarrollar la teoría de los fines de la pena en la doctrina penal nacional e internacional.

- Describir la estructura de la política pública de lucha contra el crimen en el Perú desde una perspectiva crítica del desarrollo del control criminal.
- Analizar la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual en el distrito judicial de Lambayeque y su efecto en los índices de criminalidad.
- Proponer un lineamiento estratégico para determinar la realidad problemática a través de la criminología, a fin de generar una política pública eficiente sobre el control de los índices de violación sexual.

#### **1.4. Hipótesis**

Si, el examen de la estructura de la política pública de control criminal, permite verificar que no se ajusta a la realidad jurídica y social; entonces, se deberá proponer una nueva orientación para lograr la eficacia de la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual.

#### **1.5. Variables**

##### **1.5.1. Variable Independiente**

La política pública orientada al control criminal.

##### **1.5.2. Variable Dependiente**

La eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual.

## **1.6. Métodos**

### **1.6.1. Métodos**

#### **1.6.1.1. Método Exegético Jurídico:**

La aplicación de este método de interpretación jurídica se torno de mucha importancia en el desarrollo de la investigación atendiendo a su sentido no experimental y mas bien descriptivo de la realidad, puesto que permitió partir de la verificación específica de las reglas que se ocupan de la sanción para las acciones delictivas relacionadas con la violación sexual.

Teniendo en consideración que el sentido de interpretación exegética comprende la revisión de la regla desde su sentido literal con la intención de reconocer la intención del legislador al momento de construirla; siendo el caso de la violación sexual, poder reconocer en su construcción tanto el sentido de protección sobre la violación sexual así como la finalidad que doctrinariamente se le otorga a la pena, esto es el sentido de la retribución en primer lugar o la prevención residual en último término.

Este reconocimiento permitió entender que la sanción que se aplica respecto a los delitos de violación sexual, opera como un simple castigo, que sin duda alguna es lo que le corresponde al Derecho, pero no conlleva a la verificación desde su construcción literaria a la comprensión del carácter preventivo ni tampoco el sentido resocializador de la pena; desde luego este es un tipo de examen superficial basado en la construcción gramatical, por lo que haría falta una evaluación de tipo sistemática que se muestra a continuación.

### **1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico**

De acuerdo al resultado de la interpretación desarrollada en base al método exegético, se tomará como punto de partida para la evaluación de las reglas inspiradas por las políticas públicas para luchar contra la criminalidad, en función a su entorno jurídico, siendo el principal de los exámenes aquel corresponde a la coincidencia con los parámetros constitucionales, ello implica el control de los principios del derecho en forma general, para luego ocuparse de su relación con las otras reglas del ordenamiento que se ocupan de la sanción del delito de violación sexual.

Este análisis interpretativo relacionado con el enlace sistemático de la aplicación de la regla penal que sanciona por los delitos de violación sexual, permitió establecer que no existe una relación directa entre lo que la política pública se ocupa de estratificar y el esquema de la acción que le corresponde al derecho, específicamente al derecho penal basado en sus principios entre el que resalta el de la mínima intervención, este último se ocupa de un límite para evitar que se produzcan desequilibrios en la construcción de las reglas, sobre todo en las que se dirigen a la restricción de los derechos, pero que a su vez protegen bienes jurídicos relevantes.

### **1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo**

Luego del desarrollo interpretativo como método de la investigación jurídica respecto a las estructuras típicas penales sobre la violación sexual, se procedió a la incorporación de métodos que se ocuparon de la observación de la realidad sobre dicho tema. Así pues el método que parte desde una percepción general de la realidad jurídica es el hipotético deductivo, siendo esto la política pública como base de la estrategia que aplica el Estado para ejercer control.

Siendo así, el control que interesa revisar será aquel que se ocupa específicamente sobre la acción sancionadora que realiza el Estado mediante la aplicación del ius puniendi par aplicar penas, luego del reconocimiento de la responsabilidad penal. En ese sentido, el desenlace de este método se ocupa de la verificación de los efectos que estaría produciendo dicha política estatal para la solución del problema de la violación sexual, lo cual constituye el aspecto específico de la realidad que se muestra como el resultado de esta observación, que desde luego arrojó un resultado de ineficacia sobre sus fines.

#### **1.6.1.4. Método Inductivo**

Conforme se aprecia de la aplicación del método anterior, el resultado permitió identificar aspectos específicos que están siendo causados por la regla general que corresponde al tratamiento de la violación sexual en el ordenamiento penal peruano, esas condiciones puntuales son las que se han tomado como punto de partida para la aplicación de este método que se ubica en la ineficacia de prevención que se genera por la aplicación de los tipos penales.

En ese sentido, se pudo apreciar que la ausencia de prevención en razón de los índices de la actividad delictiva sobre el delito de violación sexual, que se da como mayor incidencia en los tipos base, estarían mostrando la ineficacia de la estructura jurídica en tanto sistema de justicia, por lo que en función a estos elementos se ha logrado determinar que la estructura de la política pública que se orienta a controlar este tipo de actuar criminal adolece de un problema específico.

Para el caso especial de la acción que corresponde al Estado como garante del equilibrio social a través de la creación de estrategias públicas para lograrlo, se debe dar en base al reconocimiento de la realidad jurídica de acuerdo a los factores que promueven la delincuencia, sobre todo en el aspecto de la violación sexual, la

situación de los casos de acuerdo a los niveles sociales en los que se ejecutan, los factores que se relacionan con la cultura y el estado de pobreza que acarrearán otro tipo de consecuencias como son el alcoholismo, la drogadicción y demás que estarían generando un problema mayor como es el incremento de las violaciones sexuales.

En ese sentido se aprecia una determinación general que se relaciona con la estructura de la política pública orientada a la utilización de la herramienta jurídica del derecho penal con el fin de sancionar de manera directa, esto es que el Estado toma como primera acción la intervención del ius puniendi para aplicar una sanción sin tener en cuenta las posibilidades previas de atención del problema, la cual ha de ser de condición idónea para lograr la efectividad del control y sólo después de agotar estas posibilidades jurídicas llegar al nivel de intervención del derecho penal como ciencia.

## **CAPITULO II**

### **LA TEORÍA DE LOS FINES DE LA PENA EN LA DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL.**

En razón de la estructura de la investigación planteada se ha de tener en consideración el sentido que ocupa el desarrollo de la misma, la cual se ha generado en base a los objetivos específicos como metas para la incorporación de contenidos teóricos específicos, que en este capítulo corresponde a la comprensión de los fines que le son atribuidos a la pena como el principal medio de control que ejerce el estado a fin de asegurar el respeto por el ordenamiento jurídico, que para el caso que interesa es el derecho penal.

Atendiendo a la necesidad de reconocer los lineamientos académicos que se han generado antes del desarrollo de esta investigación, se hace preciso la incorporación de otros trabajos que se han ocupado sobre el tema bajo estudio, esto es respecto a los fines de la pena para comprenderlo desde la perspectiva que los origina como es el caso de la política pública que se orienta al control de la acción criminal.

#### **2.1. Trabajos previos a la investigación**

De conformidad con el esquema de investigación planteado desde la vista metodológica, es preciso iniciar la proyección teniendo en cuenta el Estado del Arte que se observa en la realidad académica, esto es el nivel de creación que se ha podido desarrollar en torno al tema de la medición de la efectividad de la política pública que orienta el ordenamiento de lucha contra el crimen, con especial atención en el delito de violación sexual; por lo mismo que se promueve la toma de

referencias de aquellas investigaciones desarrolladas por diversos autores que han plasmado en sus trabajos, ideas relacionadas con el tema que ahora se hacen mención, detalladas a continuación:

Es así como el primer aporte se considera la investigación desarrollada por Peres neto, (2010) titulada “*Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España*” quien concluye respecto a la característica evolutiva respecto a la legislación punitiva, a la cual se la ha consignado como: “(...) populismo punitivo entendido como el endurecimiento del castigo con el que los representantes políticos pretenden responder a demandas sociales de mayor rigor porque suponen que ello les proporciona una determinada rentabilidad política”. (p. 488)

Es claro lo que se determina en esta conclusión citada, pues se advierte la influencia que existe sobre la configuración de las políticas públicas, presión que ejerce en forma directa o indirecta la opinión pública con el fin de mantener la satisfacción aparente de los ciudadanos que en su masa popular quiere tener respuestas inmediatas para solucionar la problemática sobre cierto sector.

Es por ello que la investigación proyectada tomará como base este aspecto que reconoce la falla del sistema, toda vez que la necesidad popular se ha tornado en el motor de los intereses políticos de ciertos personajes que tienen en sus manos el poder de decisión, sin tener en cuenta que la convicción de la sociedad no siempre han de marcar los destinos de la creación de las reglas que dirijan el destino social, menos aún si se trata de leyes que procuran un castigo que puede vulnerar derechos.

Tal respuesta política criminal que se considera inadecuada y con bases de interés político antes que social, tiene un efecto negativo que se sumado a la

convicción del común de la gente que tiene enfoques dispares de lo que es la armonía social y pero aún que se verifica la existencia de una suerte de herencia cultural y social respecto al poder que parte desde su distribución en los hogares, esto es lo concerniente al machismo y el sentido paternalista que aun poseen.

Esta característica social de machismo es la que influencia en ciertos aspectos del desarrollo de los grupos, en cuanto a que siempre orienta la distribución del poder; es así como un segundo aporte se considera la investigación desarrollada por Ramos Vargas, (2017) titulada *“Influencia de los contextos familiares disfuncionales en la comisión de delitos sexuales intrafamiliares en la Región Tacna, 2012-2014”*, quien concluye de la siguiente manera: “En los delitos de violación sexual intrafamiliar existe contextos familiares disfuncionales caracterizados por: presencia del machismo, falta de cohesión familiar, armonía familiar, comunicación, afectividad, adaptabilidad, permeabilidad y presencia de roles confusos”. (p. 239)

Este aspecto que ha sido descrito en la investigación tomada como referencia, tiene una estrecha relación con el carácter de cuidado que ha de tener el Estado para controlar aspectos tan importantes como la protección de la familia, si es cierto que lo descrito bien pudiera entenderse como justificación de la violencia ocurrida en este ámbito; sin embargo es importante tener en cuenta todas estas características para la observación de la realidad que de manera previa se supone debe ser examinada por el legislador para la creación de las reglas que mediante el castigo prevengan este flagelo social.

Es precisamente sobre ese aspecto que el proyecto presente se ha de ocupar de revisar en la realidad, es decir cuan efectiva resulta la política pública de lucha contra la criminalidad para conseguir con eficacia el nivel de prevención esperado

respecto a la violencia sexual, con el distingo específico de los niveles y ámbitos en los que se produce, sobre todo en este último recogido como antecedente, que resulta ser de un carácter bastante sensible.

También se considera la investigación desarrollada por Espinoza Mondragón, (2007) titulada *“Política criminal y prevención del delito hoy. Una propuesta de modelo de prevención para el municipio de León, basado en la participación ciudadana”* quien realiza una observación de las finalidades que deben cumplir determinadas políticas de seguridad ciudadana, las cuales están en la obligación de propiciar la ejecución de variadas medidas de prevención general en conjunto para lidiar con los distintos contextos circunstanciales que propician de forma indirecta la creación de actos delictivos. Siendo entonces la siguiente conclusión a la cual el autor llega al respecto del punto tratado: “(...) Así mismo se debe asegurar la reinserción social de las personas consideradas culpables de delito, neutralizar los factores que puedan producir la reincidencia y la eficacia del cumplimiento de las leyes penales”. (p. 280)

Si bien es cierto que la política pública que se ocupa de la lucha contra el crimen debería proyectar niveles de seguridad, es preciso que la orientación de quienes tienen bajo su cargo la creación de las reglas de orden jurídico penal, sea de un corte netamente social en el momento de la observación de la realidad; esto es que, la forma en que se construyan las sanciones deben tener características de proporcionalidad sí, pero más importante aún el hecho de que sea revisada la actuación del derecho penal desde la perspectiva de la última ratio de esta manifestación del ius puniendi.

Así pues se requerirá de la existencia previa de acciones realizadas por el Estado mismo que se proyecten sobre la solución del problema delincriminal, sin la

intervención del derecho penal, esto es in castigo, para que luego de la verificación de la insustancialidad, o inutilidad de las acciones previas de control, resulten fallidas, sólo así se podrán crear sanciones que vayan desde el nivel más bajo permitido hasta la más radical pero en directa relación al nivel de perjuicio ocasionado en la víctima.

Surge entonces el cuestionamiento de que si esta misma regla opera de una forma absoluta respecto de todos los tipos de conductas delictivas, dicho de otro modo, si esta manera de proceder para la creación de las reglas opera sobre la conducta delictiva de violación sexual, por sus propias características, por ello se considera la investigación desarrollada por Alcalde Muñoz, (2007) titulada “*Apreciación de las características psicosociales de los violadores de menores*” quien concluye al respecto de los comportamientos inherentes a los transgresores implicados en dichos siniestros de tipo sexual planteados en la presente investigación, además de las posibles causas que determinen dichos actos, estando entre ellas, determinadas situaciones que pudieron haber generado traumas durante los primeros años de formación física, moral y psicológica, tal cual es planteado entonces de la siguiente manera: “(...) no presentan enfermedad mental y existen también ciertas circunstancias que activan su instinto sexual agresor, como es la pobreza, el bajo nivel valorativo, presencia de material pornográfico, hacinamiento, y vida promiscua”. (pp. 284-285)

Al respecto, también se considera la investigación desarrollada por Huaranga Chuco, (2016) titulada “*Violación sexual de menores de edad y sus consecuencias jurídicas y psicosociales en Huánuco*” quien concluye de la siguiente manera: “El trabajo de las autoridades políticas y jurisdiccionales se concretan más en cumplir su trabajo burocrático, confección de estadísticas visto el

asunto en cifras, sin incidir más bien sobre un accionar consecuentemente humano”.  
(p. 58)

Según lo que llega a determinar la investigación citada, es importante reconocer la apreciación que hace sobre la actividad tanto de las gestiones gubernamentales, así como de la acción de la propia justicia, puesto que se refiere también al ámbito jurisdiccional, aspecto que bien puede ser corroborado en la realidad, toda vez que la demagogia política y la burocracia abordan el quehacer de los gobernantes, lo cual conlleva a razonar el hecho de que las estrategias que se generan con el fin de direccionar el trabajo público de control no resulten lo suficientemente estudiadas.

Tal estudio se refiere a la cuestión problemática que originaría la estrategia de la política pública, así pues para el caso de la criminalidad el sentido humanista al que se refiere el autor se puede identificar con el hecho de que sólo se trata a la cuestión criminal desde una perspectiva cuantificadora, esto es basada en las cifras que muestran su presencia en el entorno social; siendo por ello trascendental la incorporación de un análisis que devenga de la observación criminológica que permita reconocer los factores que están generando la incidencia delincuencial.

Si bien es cierto, la actividad política para controlar el índice delincuencial ha de partir del reconocimiento de la realidad social, para lo cual desde luego es útil la muestra estadística, pero sólo para tomarla como base de la observación para luego incorporar un análisis mas profundo en razón de los factores; el mismo problema según la determinación de la tesis citada, se puede observar en las labores jurisdiccionales que se aprecian respecto a la determinación de las necesidades jurídicas para accionar sobre el crimen; ello porque los informes que genera el sistema de justicia sólo se basa en tal determinación numérica.

Entonces, las apreciaciones planteadas por los trabajos previos a esta investigación, conllevan al razonamiento de que la política pública ha generado con el paso del tiempo la configuración de un sistema con bases más cuantitativas que cualitativas, siendo así, al tener como punto de apoyo a la criminología para identificar los factores que impulsan al delito, se percibe como una herramienta inutilizada, dado que la función de la pena no se ha llevado al nivel que debería propiciar, esto es el control de la criminalidad.

Es por ello que resulta importante el reconocimiento previo de los planteamientos teóricos que conllevan a la comprensión de los fines que han sido otorgados por el propio sistema para que las sanciones que se apliquen consigan el efecto de control en función al ejercicio de la facultad del *Ius Puniendi* del Estado.

## **2.2. La pena en el derecho comparado**

Son en demasía, las propuestas en dirección al arbitraje de soluciones penitenciarias fuera de ámbito en proporción a las críticas que reciben incesantemente las medidas de privación de libertad, destacando, aquellas que son de corta duración. Durante los últimos años, en el área del derecho comparado los recursos que poseen un respaldo de tipo legal son mayores en cantidad, sin embargo, la finalidad por la cual se toma en cuenta este punto en la presente investigación, es en primera instancia contemplar diversas medidas alternativas las cuales son tomadas en países extranjeros, con la finalidad de que puedan proponerse y posiblemente ejecutarse en vez de la pena más común a utilizar en el sistema judicial del Perú, siendo esta, la de prisión.

A través de la finalidad de “resocializar” (tratándose en el área de la pena privativa de libertad), se ha llegado a diversas cuestiones en relación a que si

realmente es posible dicho planteamiento. Ya sea “resocializar” o “reeducar”, conceptos como estos simplemente no podrían ejecutarse en todas las penas privativas de libertad, al menos no desde un aspecto general, puesto que el objetivo de dichas sanciones consiste precisamente en corregir a través de restricciones de ciertos derechos humanos fundamentales, las acciones que desencadenaron en daños tanto temporales como permanentes hacia la sociedad por parte de un individuo.

Si la razón del delito cometido por dicho individuo se concretó debido a la ausencia de la capacidad de adaptarse a la sociedad durante el período que se encontraba siendo parte de esta, es complicado pensar que dicho responsable será capaz de corregirse y a su vez reeducarse dentro del mismo establecimiento penitenciario, el cual le mantiene aislado de la sociedad, obligado a vivir durante cierto tiempo, prolongado o no, privado de libertad y sujeto a nuevas normativas de carácter rígido que le trunquen toda posibilidad de socializar con el entorno exterior.

### **2.3. Los fines de la pena**

Los fines de la pena no son otros que los objetivos que se buscan conseguir mediante su imposición, dichos objetivos o fines son: la retribución, la prevención y la rehabilitación. En ese orden de ideas, la retribución es el castigo o respuesta que la sociedad da al delincuente por el mal que causó, la prevención es el intento de disuadir a otros y al mismo delincuente de la comisión de nuevos delitos; y la rehabilitación es el intento de que el delincuente vuelva al marco social del que se separó por el delito.

Definitivamente, un aporte importante el que brinda Espinoza (2017), quien refiere: “No hay nada más adecuado, actual y acertado que resocializar al

condenado con la finalidad que no vuelva a reincidir en el delito, además, cómo podría ser posible que tanta teoría, tanta legislación, tantos juristas se puedan equivocar”. (pág. 121)

De esta indicación se puede reconocer a la pena con una función de resocialización respecto de la situación del sujeto que ha cometido una acción que quiebra el ordenamiento jurídico, esto se entiende más como una finalidad en tanto que la resocialización del interno debe provocar un efecto de prevención pero sólo sobre el ámbito personal del individuo, lo que implica que solamente generará un efecto preventivo respecto a la reincidencia en la que podría caer.

En nuestro país durante la formación académica se suele enseñar que el sistema de rehabilitación social es la mejor opción para tratar a una persona que ha cometido un delito, resulta tan lógico como natural, puesto que en lo que corresponde a la estructura de derechos normativos, por su condición de ser humano en atención a la dignidad se le reconocen derechos de manera general, independientemente de la acción delictiva que hubiera cometido.

En relación al sistema de rehabilitación social, Ávila (2008) infiere: “Es lo más lógico, porque algo positivo hay que hacer con los condenados, a su vez es lo más natural, esto porque no hay otra cosa que se le puede pedir a un delincuente, que cambiar para bien”. (pág. 144); definitivamente esta apreciación es un tanto mas orientada a la lógica, puesto que representa el desencadenamiento de las acciones del Estado para lograr el bienestar del individuo que hubo delinquir y requiere de mayor atención para evitar que vuelva a caer en la delincuencia.

Mas allá de lo descrito, se debe tener en consideración la necesidad de reconocer una verdadera finalidad de lo que se conoce como pena en el

ordenamiento jurídico penal, así pues la incorporación de las sanciones en esta regulación obedece a la necesidad de generar sanción, desde luego que se aplican en razón del reconocimiento de la responsabilidad penal, mediante el juicio y con sentencia firme; por o mismo que se entiende que la condición sancionadora sería la principal finalidad de la que debería comprenderse respecto a la ejecución penal.

Es así que se debe reconocer lo señalado de parte de García (2008) sobre la función de la pena señala que: “Deberá participar todo el sistema penal, de manera que, influya en su operatividad, tanto la previsión legal de la pena, como su imposición judicial y ejecución deben tener como punto de partida la función que la sanción penal cumple”. (pág. 1)

Conforme se aprecia de este sentido, se ha de entender que la realidad de la función de la sanción penal, implica el reconocimiento de participación del ius puniendi del Estado con el fin de generar sanción mediante el reconocimiento de la responsabilidad penal respecto de una determinada acción delictiva; ante ello se debe asumir según el autor citado que, tal intervención es un conjunto de acciones articuladas con el fin de que sea operativa la intervención de la pena, lo cual implica que su finalidad sea de corte sancionador.

El cuestionamiento que siempre se ha desarrollado es en efecto la necesidad de conocer si es que la prueba como tal dentro del ordenamiento jurídico penal, representa algún tipo de prevención en cuanto a lo referente a su función principal, por lo tanto lo interesante es la búsqueda de los conceptos que permitan dilucidar si en efecto cumpla con esa finalidad.

Partiendo de esta necesidad se debe admitir la presencia teórica de posturas importantes que señalan como finalidad de la pena ciertas características en las que

se basan, por ello se señala que tendría en inicio una finalidad de tipo retributiva puesto que se aplica con la única finalidad de castigar al sujeto en la medida de la acción producida; luego se advierte la presencia de otra inclinación teórica que señala sobre la condición de prevención que estaría produciéndose como la finalidad de la pena, con lo cual se reconoce una aptitud a la sanción de lograr que los delitos se sigan cometiendo; entonces surge finalmente una tercera teoría de los fines de la pena que se muestra un tanto ecléctica o más bien unificadora, puesto que indica la presencia de estas dos posibilidades de manera conjunta.

Desde luego la inclinación que adoptan los esquemas normativos de los diferentes ordenamientos penales, tomarán una dirección específica, dependiendo de lo cual incluso tienen aspectos encontrados en la descripción dado que los resultados no permiten reconocer la verdadera finalidad, así pues no siempre se logra alcanzar la prevención con la sola aplicación de una pena.

En ese sentido, resulta necesario precisar que respecto de la función de la pena, nuestro ordenamiento penal se rige bajo la teoría dialéctica o la teoría de la unión, donde su principal representante es Roxin, traduciendo su libro *“Sentido y límites de la pena estatal”*, Luzón (1976) precisa que:

“La función que cumple la pena está presente en cada momento de su existencia, desde la conminación de la pena (al elaborar la norma penal), su aplicación judicial y la ejecución de la pena” (Luzón Peña, 1976, pág. 11).

En la conminación, se aplica la función preventiva general de la pena, ya que se informa a la ciudadanía de la sanción penal que acarrearía la vulneración de bienes jurídicos. Mientras que, en la aplicación judicial, por un lado, el Estado

reafirma su rol sancionador en pro de la protección de bienes jurídicos y, por otro, busca desincentivar al delincuente de la posibilidad de delinquir.

En razón de lo descrito , se puede observar la presencia de acciones que conllevan al reconocimiento de la forma en que se ha estructurado el pensamiento jurídico que orienta la razón sobre que la sanción tiene un verdadero efecto preventivo, en tanto que se presume de que la mera publicación de las reglas o su existencia aun cuando no se tenga el conocimiento exacto por toda la población, ya se estaría produciendo el carácter preventivo de la sanción, lo cual no tiene un refrendo exacto con la forma en que se observa la realidad delincuencia, en consecuencia el efecto negativo de la sanción.

En definitiva, tal cual se ha podido observar, la funcionalidad de la pena está encaminada por esta parte de la teoría como una suerte de acción incluso antes de su intervención, esto es que las sanciones o la pena en sí surtirán un efecto preventivo incluso antes de su aplicación con su sola existencia, para que también luego de ser aplicadas comporte un efecto de limitante a la intención delictiva, principalmente para lo que corresponde a la reincidencia.

Dado ello es interesante también describir aspectos sobre la finalidad de la pena, como aquellos que se orientan hacia el reconocimiento de una finalidad mucho más allá de las antes mencionadas, puesto que su verdadero efecto se concebirá incluso cuando el sentenciado haya cumplido la condena y se pueda corroborar que en efecto la pena aplicada cumplió su cometido.

Desde ese punto de vista deberá tenerse en consideración lo señalado por Meza (2019) que al referirse al momento en que se produce el efecto o finalidad de la sanción, indica que: “Estará presente en el momento de la ejecución penal, ya

que nuestro sistema penal persigue el fin resocializador, considerando que la pena no debe involucrar una afección al libre desarrollo de la personalidad”. (pág. 2)

Desde ese punto de vista entonces se puede consolidar una postura más que sindical como única función o finalidad de las penas, aquella que traería como consecuencia la resocialización como producto de las acciones que se hayan desarrollado en el proceso del cumplimiento de la sentencia, esto es durante el internamiento del sujeto que ha delinquido a fin de cumpla con la sanción y reciba un tratamiento adecuado para alcanzar ser reinsertado en la sociedad.

Definitivamente, tal postura implica ir más allá de la propia concepción del origen que funda la sanción, pero no deja de tener sentido orgánico, puesto que la estructura del ordenamiento jurídico se desenlaza en la ejecución de la sanción y sólo en su cumplimiento o ejecución se puede reconocer la función o finalidad de la pena, esto es a través de la verificación de los efectos que genera en el delincuente.

#### **2.4. Crítica al fin preventivo de la pena**

Teniendo en cuenta que, las teorías relativas de la pena establecen a la pena una utilidad social, la prevención de delitos como un medio para proteger determinados fines sociales, la idea de prevención aplicaría sobre la colectividad (prevención general) y en relación al infractor (prevención especial).

Así tenemos a Villavicencio (2006), para quien la teoría de la prevención general la pena sirve para amedrentar a todos los individuos con la finalidad que no cometan delitos, esta teoría a su vez, se divide en:

**a) “Prevención general negativa**, que pretende inhibir a las personas en la comisión del delito mediante intimidación o disuasión de éstas a través de la aplicación de la pena”. (pág. 57)

Algunos doctrinarios señalan que, existen determinados delitos en los que la amenaza de pena no puede ejercer su función motivadora, como sucede en el caso de los delitos pasionales, pues la providencia de delinquir en estos casos no es producto de una evaluación racional de los pros y los contras de la acción, sino de un mero impulso.

En ese sentido, García (2008), advierte: “La función de prevención general negativa tendría que limitarse solamente a los delitos en los que el agente hace efectivamente una ponderación de costes y beneficios de su actuación”. (pág. 4)

Así las cosas, la aplicación de la teoría de la prevención general negativa se reduciría sólo a los delitos en los que el agente cumpla con el modelo de sujeto que actúa racionalmente.

**b) Prevención general positiva**, “que busca la afirmación del derecho en un estado social y democrático, con el deseo de producir en la colectividad la fidelidad y el interés hacia la fuerza y la eficacia de la pena halladas en las sentencias”. (pág. 59)

De lo expuesto anteriormente, es posible concebir que mediante la prevención general positiva se intenta que la ciudadanía crea en sus instituciones y esto lleve a la integración de la misma con las actividades judiciales; ello implica la necesidad de un razonamiento que se oriente hacia el cuidado de la lesión de los bienes jurídicos, lo cual sin duda requiere del conocimiento previo de la regla.

Desde tal perspectiva se puede incorporar la idea de que las acciones delictivas tendrán la oportunidad de prevenirse en función a la convicción de la población que se vea impulsada a delinquir deba tener no sólo el conocimiento de la regla sino que pueda ejercer el juicio de valor sobre la condición de prevención que se ha incorporado en la propia construcción de los tipos.

Dada tal construcción se puede reconocer pues la presencia de las penas como parte de los elementos de dichos tipos penales, partes específica que para cumplir la acción preventiva se requeriría que toda la población tenga el conocimiento exacto de dichos contenidos; mas no resulta de una cuestión apreciable como certeza, sino mas bien como posibilidad preventiva.

Por su parte Espinoza (2017), acerca de la teoría de la prevención especial, considera que en lo que se refiere al fin de las sanciones puede entenderse como destinada a: “(...) influir directamente sobre el agente de manera individual para evitar la comisión de nuevos ilícitos penales, por ende, actúa no en el momento de la conminación legal, sino en la imposición y ejecución de las penas”. (pág. 4)

Tal cual lo señalado como parte crítica anteriormente, se debe entender que en efecto la función de las penas tendrán una injerencia directa y personal sobre el individuo que se comporta como el ejecutor de la acción delictiva, puesto que será quien padezca su implicancia de restricción de derechos como es el caso específico de la libertad.

Es por ello que se debe asumir que el efecto o finalidad de esta sanción como una que se ejerce en dos momentos, el primero que corresponde a cuando en el nivel jurisdiccional le resulta impuesta la sanción en razón de la advertencia de la responsabilidad penal sobre la comisión de un delito, y el segundo cuando se ha de

ejecutar tal sanción, más directa esta apreciación puesto que sólo así se puede reconocer su verdadero efecto, dado que la prevención se dará conminando al sujeto para que ya no vuelva a delinquir.

Dese luego es una presunción, que sólo se podrá corroborar en tanto se pueda hacer un seguimiento apropiado del interno durante su periodo de encarcelamiento, para luego observar también el resultado de la presunta resocialización que tendría que producirse en el interno, aspectos que en la realidad de la acción jurídica nacional o el sistema de justicia no se aprecian como tal, por lo mismo que en tal sentido, la apreciación de finalidad preventiva en este campo no podría asumirse como efectiva.

Asimismo, tenemos a Rodríguez (1999), para quien: “La idea de prevención especial se encuentra ligada a la de peligrosidad, asignándole a la pena la función de ser un mecanismo que evite la comisión de futuros delitos, buscando la neutralización, corrección o reeducación del delincuente. (pág. 41)

Se puede comprobar claramente que, esta teoría pretende darle a la pena un efecto o derivación estimulante, que influya directamente en la persona que cometió el delito, para que no vuelva a reincidir; luego siguiendo la crítica hasta el momento establecida por la tesis, la tendencia de un carácter preventivo de la sanción se obtiene como un reconocimiento de las condiciones que puedan recurrir en el desarrollo de la actividad ejecutora de la sanción.

Tal cual se indica tendría que observarse como una cuestión de correspondencia entre la sanción y la acción delictiva en función a su nivel de peligro, lo cual corrobora la estructura de la aplicación de sanción en función a la lesión causada sobre el bien jurídico protegido, pero la cuestión va más allá, cuando

se intenta reconocer a la pena como un mecanismo que se proyecte a la disminución de la acción delictiva, sobre todo al indicar que se trataría de una suerte de neutralización, la cual bien puede generarse con el internamiento, pero luego de cumplida la sanción, el reo adquiere su derecho de libertad y no se consigue observar de manera adecuada su progreso de adaptación.

Sin embargo, tal como señala García (2008): “Una de las críticas a esta teoría es que, de alguna manera, la culminación de la pena está condicionada a si el delincuente se convence de nunca más volver a delinquir o si logra reinsertarse a la sociedad”. (pág. 7)

## **CAPÍTULO III**

### **LA POLÍTICA PÚBLICA CONTRA EL CRIMEN EN EL PERÚ**

En la estructura de los Estados como el peruano, se ha de reconocer la presencia del esquema gubernamental que impera como el presidencialismo, así pues, dicho esquema implica que existan reglas de juego para el desarrollo de la actividad que según la estructura normativa constitucional le corresponde al órgano de poder Ejecutivo, que se ocupará de generar las debidas estrategias para que la actividad pública sea direccionada a fin de conseguir la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y del propio Estado.

Dentro de esta estructura y lineamientos se puede apreciar al sector de justicia en el que corresponderá la creación de las estrategias que permitan establecer el control de parte del Estado sobre la acción criminal, entendida esta como el conjunto de acciones individuales o colectivas que atentan contra el ordenamiento jurídico penal; siendo de principal atención aquellos parámetros establecidos respecto a la acción estatal sobre el crimen generado contra el derecho a la libertad sexual.

#### **3.1. La teoría de las políticas públicas.**

Para asumir la estructura ideal de las políticas públicas, es preciso recoger las puntualizaciones teóricas que se han generado para definirla como tal, así pues se marca dentro de lo referente a las líneas de investigación que permiten el análisis de este tipo de estructuras, por ello es necesario recoger definiciones relacionadas y relevantes como la desarrollada por Gómez Arias, (2012) titulada “*Gestión de políticas públicas: aspectos operativos*” quien define de la siguiente manera:

“Política pública es una directriz que el Estado, autoridad legítima del sistema social, impone al colectivo como manera de proceder frente a un asunto específico, reconocido como interés público”. (pág. 2)

En definitiva las acciones que puedan desarrollarse a nivel estatal dependerán mucho de la forma en que se haya estructurado de manera previa el plan de gobierno antes de iniciar sus actividades gubernamentales, pese a ello es posible la incorporación de nuevas pautas específicas que puedan ir cambiando la forma de establecer el control de una manera más adecuada.

Tal como se muestra en la definición recogida se entiende que su carácter público es lo que le proporciona ese nivel de injerencia para poder orientar el destino de las acciones estatales rumbo al control de la actividad, por lo cual resulta importante entender que se encuentra en la responsabilidad del propio Estado el hecho de que las medidas a tomar tengan una relación directa con la identificación exacta de las causas que promueven los problemas sociales.

Para González Rodríguez y Pérez Nájera, (2016) titulada “*La política criminal y la seguridad ciudadana en Latinoamérica: Apreciaciones actuales*” quien define de la siguiente manera: “La Política Criminal constituye la reacción socio-estatal que traza los derroteros de actuación de las diferentes estructuras del Control Social con fines de organización sistémica y racional del enfrentamiento concreto a la criminalidad”. (pág. 3)

Pues bien según lo señalado se puede corroborar el comentario anterior en razón de que esta cita señala a la política pública como una suerte de acción en razón de algo específico como es la realidad social que asume el Estado como responsabilidad para ejercer control sobre su manejo y propiciar la estabilidad que

se precisa en una organización democrática de derecho; importantes es reconocer el apuntalamiento específico de la realidad sobre la criminalidad para llegar a establecer un sendero adecuado con el fin de solucionar el problema, desde luego interesará a la población que estas pautas estratégicas se creen de una manera más insidiosa o severa con el fin de propiciar mas control, pero no siempre resulta ser la medida más idónea como se verá más adelante.

Pues bien, la comprensión de las acciones estatales a través de la generación estratégica para la lucha contra el crimen no siempre ha sido bien calificada puesto que los índices de criminalidad no han tenido una reducción adecuada, al punto de que siempre se ha tenido a la opinión pública en oposición a las maneras en que se han generado estas políticas de control.

En definitiva, ha de interesar como es que la política pública que se origina en el propio sentir de la población puesto que ha de partir de la existencia de los problemas sociales más álgidos para que luego del reconocimiento de sus aspectos principales y la realidad jurídica que se produce torno al problema, se puedan generar de manera idónea las acciones a seguir por la gestión.

Sobre este aspecto, para la investigación interesa tomar en consideración las actividades estatales que se han generado en función a un punto específico de la criminalidad, tal es el caso de las violaciones sexuales, que sin duda es de fácil verificación que los índices cada vez suben en el rango de medición anual, por ello será necesario reconocer el nivel de importancia que debería asumirse desde la perspectiva jurídica, para luego revisar las acciones que se han tomado para acudir al cambio o control.

Así interesa lo señalado por Núñez del Prado, (2012) titulada “Definiendo la violación sexual en el derecho internacional: la contribución de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc” quien define de la siguiente manera:

La violación sexual es un crimen que afecta tanto a la integridad física como mental de las personas en las cuales es infligida, así como también sus relaciones sociales y familiares dependiendo de su contexto cultural. (pág. 14)

por Bermúdez Soto, (1998) titulada “*Elementos para definir las sanciones administrativas*” quien define de la siguiente manera:

Se estimará como sanción toda aquella retribución negativa dispuesta por el Ordenamiento Jurídico como consecuencia de la realización de una conducta. (pág. 1)

por Selmini Unibo, (1998) titulada “*La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo*” quien define de la siguiente manera:

...Prevención es el conjunto de las estrategias dirigidas a disminuir la frecuencia de ciertos comportamientos, sean estos considerados punibles o no por la ley penal, a través del uso de instrumentos diversos de aquellos penales. (pág. 5)

### **3.2.El origen de la política pública**

La creación de políticas públicas no es una actividad nueva, según Harguindéguy (2017), “Su origen tiene lugar a partir de los numerosos informes producidos por expertos a lo largo de la historia para ayudar a sus propios gobiernos a tomar decisiones acertadas”. (págs. 30-32)

Durante el liberalismo clásico, existía una clara frontera entre lo público y lo privado, lo que implicaba la mínima participación del Estado en asuntos de los

ciudadanos; siendo su principal función la defensa, el orden público y la justicia; no obstante, para afrontar la gran depresión, el expresidente Roosevelt inserta un nuevo modelo: “*New Deal*”, borrando la diferencia entre público y privado y ampliando las competencias del Estado a nuevos sectores, paliando las deficiencias del mercado a través de la nacionalización de empresas, financiación de servicios sociales y la creación de empresas públicas. (Harguindéguy, 2017, págs. 32-34)

En este contexto, se hace necesario los estudios sobre la acción pública, siendo Harold Lasswell quien en 1930 utiliza por primera vez la expresión “*políticas públicas*”; posteriormente en 1936 se crea la Escuela de Administración Pública en Harvard, apareciendo el master en Políticas Públicas; y a partir de entonces surgen los hoy llamados “*Think Tank*”, encargados no solo de criticar la acción pública sino de aportar herramientas de control de la administración pública.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el análisis de políticas públicas es el estudio sistemático de políticas alternativas para brindar información a los funcionarios públicos con el fin de ayudarlos a crear mejores políticas y opciones de programas.

Desde una perspectiva macro, “Las políticas públicas se definen como el rasgo gubernativo de todo régimen político, es decir, se conciben las políticas como el recurso a través del cual la función gubernativa hace que la interacción orgánica entre el Estado, el régimen político y el aparato estatal se exprese y cumpla dentro de un orden establecido” (Pisfil Capuñay, 2006, pág. 135).

Mientras que, desde una perspectiva micro, “Las políticas públicas se definen como un curso de acción gubernativa, de donde, los gobiernos (y las

políticas) hacen que la interacción orgánica entre el Estado y la Sociedad se exprese y cumpla con un propósito definido”. (Pisfil Capuñay, 2006, págs. 135-136)

En el caso nuestro país, las políticas públicas deben ser analizadas en el contexto de una precariedad política evidente y una informalidad institucional generalizada, que tipifica una forma particular de estructurar políticas públicas en países de frágil institucionalidad.

Medellín (2004) sostiene que la política pública en países con problemas de baja autonomía gubernativa como el Perú se caracteriza por:

- Una resistencia institucional a la planeación y la evaluación de las políticas públicas;
- La desconexión entre los procesos de planeación y los de presupuestación;
- La prevalencia de rígidos sistemas de control que obstaculizan la acción gubernamental;
- Una excesiva concentración del poder y la usurpación de funciones en determinadas entidades y organismos públicos;
- Inestabilidad en los altos cargos ministeriales, la que se expresa en alta inestabilidad de las políticas públicas; y,
- Una tendencia a elaborar las agendas públicas en función de los deseos de quien gobierna. (Medellín Torres, 2004)

Al respecto, Pisfil (2006) señala: “Ni el estado y el gobierno no son capaces de mantener la unidad del poder político institucionalizado, ni la unidad de acción de sus instituciones. Están muy lejos de aplicar modelos del tipo Escuela de Diseño o similares”. (pág. 137)

En síntesis de lo expuesto, y teniendo en consideración a Harguindéguy (2017):

El análisis para las políticas públicas tiene por objetivo mejorar las políticas públicas para maximizar el uso de recursos públicos siendo lo más eficaz posible y el análisis de políticas públicas tiene por objetivo entender mejor lo que nos expresan las políticas públicas sobre el Estado y la gobernanza en general. (pág. 35)

### **3.3.Eficacia de la política pública en la lucha contra el crimen**

Durante la última década del siglo XX, la legislación nacional se autodenomina como Ley de protección de la violencia familiar aparece en 1993, casi finalizando el siglo XX, y 172 años después de la Independencia del Perú. Asimismo, en 1991 el Código Penal peruano establece la posibilidad de las mujeres casadas de denunciar a sus cónyuges por violación sexual; a partir de entonces, se ha desarrollado una serie de normas y políticas para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer, con énfasis en la violencia familiar.

Esta década fue particularmente fértil en la aprobación de políticas públicas relacionadas con la violencia familiar o sexual, aunque con enfoques no necesariamente concordados o similares, al menos en una primera etapa.

Empero, la política en la materia no recibió el suficiente respaldo presupuestal y político para lograr su plena implementación, sin embargo, es un secreto a voces que la coordinación intersectorial en nuestro país durante años se ha caracterizado por ser débil e insuficiente con todo ello se ha favorecido la impunidad.

El año 2002, se aprobó el primer plan nacional contra la violencia hacia las mujeres con un ámbito temporal, concluyendo el 2007; terminada su vigencia se aprobó el segundo plan luego de un año de concluido el periodo del plan anterior, lo que evidencia la precariedad legislativa y poca importancia para erradicar la violencia en general lo que incorpora el carácter sexual que es el que interesa a esta investigación.

## **Capítulo IV**

### **Análisis y resultados**

La parte de observación de la realidad que le corresponde a esta sección de la tesis, se ha presentado bajo el esquema de recopilación previa de la información de carácter estadístico, para lo cual se procedió a tabular dicha data a fin de comprender el resultado de manera puntual sobre el nivel de incidencia del delito de violación sexual.

De otro lado se ha tenido en cuenta la validación de las posturas de la investigación a través de la intervención de los expertos en el área del derecho penal que según su experiencia diaria en el manejo jurisdiccional de este tipo acción delictiva, han dado su opinión para validar los planteamientos señalados en esta investigación. Todo ello se plasma a continuación a fin de que se pueda utilizar posteriormente en la discusión de los objetivos específicos.

#### **4.1. Resultados estadísticos:**

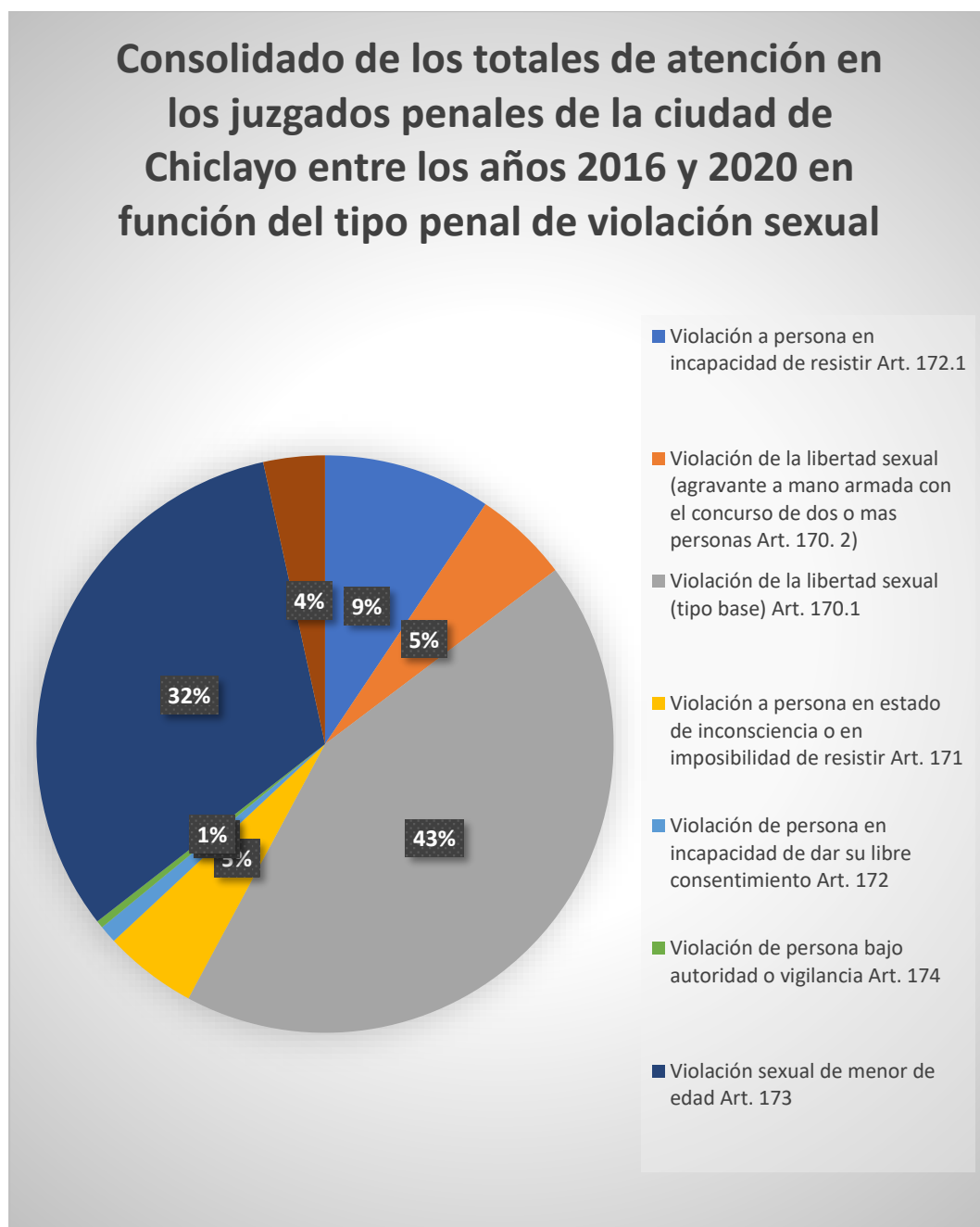
Para el desarrollo del análisis estadístico se ha recurrido al Sistema de Información judicial de la Corte superior de Justicia del Distrito Judicial de Lambayeque, quienes han respondido con la información pertinente respecto a la estadística que corresponde a los índices de criminalidad sobre el delito de violación sexual entre los años 2016 al 2020, data que se ha tabulado de la siguiente manera en función a los tipos específicos.

*Tabla 1: cuadro de la tabulación de resultados estadísticos recopilados de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre 2016 y 2020 respecto al tipo penal de violación sexual.*

Consolidado de los totales de atención en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre los años 2016 y 2020 en función del tipo penal de violación sexual	
Tipo penal	Cantidad
Violación a persona en incapacidad de resistir Art. 172.1	180
Violación de la libertad sexual (agravante a mano armada con el concurso de dos o mas personas Art. 170. 2)	102
Violación de la libertad sexual (tipo base) Art. 170.1	827
Violación a persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir Art. 171	100
Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento Art. 172	19
Violación de persona bajo autoridad o vigilancia Art. 174	8
Violación sexual de menor de edad Art. 173	615
Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave Art. 173-A	66
Total	1917

Como se puede apreciar de la tabulación estadística respecto a la cantidad de casos ingresados entre los años 2016 y 2020, existen modalidades típicas respecto al delito de violación sexual, las cuales se producen con mayor frecuencia entre las cuales se verifica al tipo base de violación sexual, así como la que se desarrolla sobre menores de edad; resultado que se puede apreciar de manera más adecuada en la gráfica siguiente:

*Ilustración 1: Gráfica porcentual de la incidencia de las modalidades de violación sexual en los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo entre los años 2016 al 2020.*



## **4.2. Resultados de opinión**

El análisis de la realidad que importa a esta investigación se ha configurado en dos sectores, el primero que se ha descrito con anterioridad que es el reconocimiento de la situación delincuenciales en tanto el nivel de comisión de los delitos de violación sexual según los tipos penales que se presentan en el esquema jurídico penal peruano. Luego en segundo lugar se ha previsto la verificación de las posturas de esta investigación por parte de los expertos, esto es la validación de su sentido.

Para tal efecto se elaboró con anticipación la estructura de un formulario que incorpora afirmaciones que tienen por origen a cada una de las variables, así pues, sobre cada una de ellas se ha plasmado una definición, un nivel crítico y otro propositivo, con el fin de que los expertos que desarrollan sus labores diarias en el entorno judicial puedan indicar el nivel de aceptación que conciben sobre cada una de las posturas de la tesis.

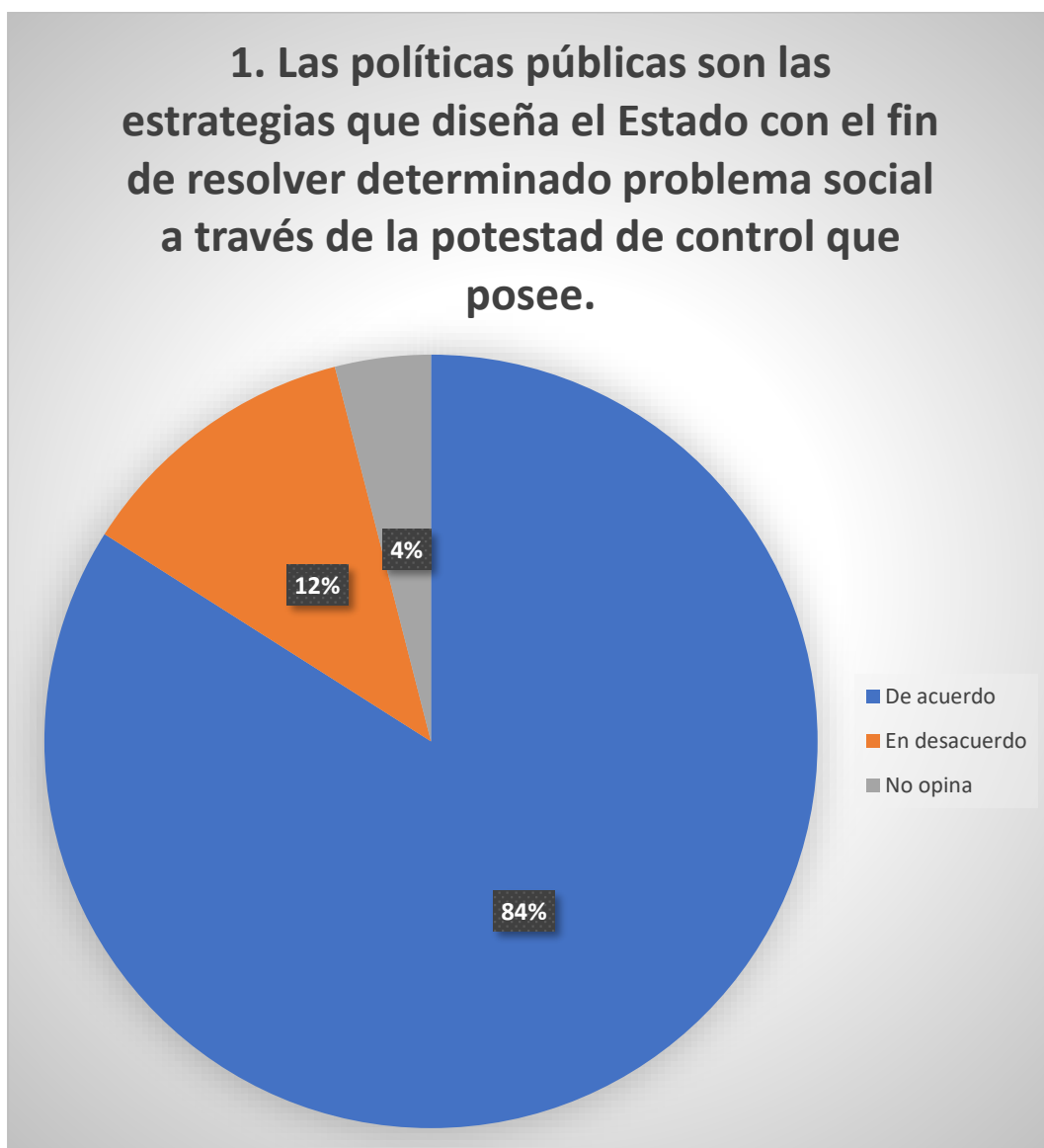
Bajo esa secuencia de ideas se aplicó dicho formato de encuesta a la cantidad de 50 operadores de justicia entre los que participaron tanto a especialistas judiciales, jueces y abogados de la ciudad de Chiclayo, muestra señalada de acuerdo a la regla estadística de la conveniencia del investigador, dado el contacto directo que se tienen con quienes desarrollan actividades relacionadas con el delito de violación sexual.

*Tabla 2: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1.*

**1. Las políticas públicas son las estrategias que diseña el Estado con el fin de resolver determinado problema social a través de la potestad de control que posee.**

Opciones	Respuestas
De acuerdo	42
En desacuerdo	6
No opina	2
Total	50

*Ilustración 2: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 1.*



**OBSERVACIÓN:** Según lo que se aprecia de los porcentajes obtenidos, el 84% de la población encuestada indica que esta de acuerdo con el concepto generado en esta afirmación, por lo mismo que resulta validado en función a la opinión de los expertos, lo que implica el reconocimiento de un manejo adecuado del entendimiento sobre las políticas públicas.

Es importante señalar también el hecho de que la referencia sobre el control de la actividad criminal se convierte en una obligación estatal, de allí que la

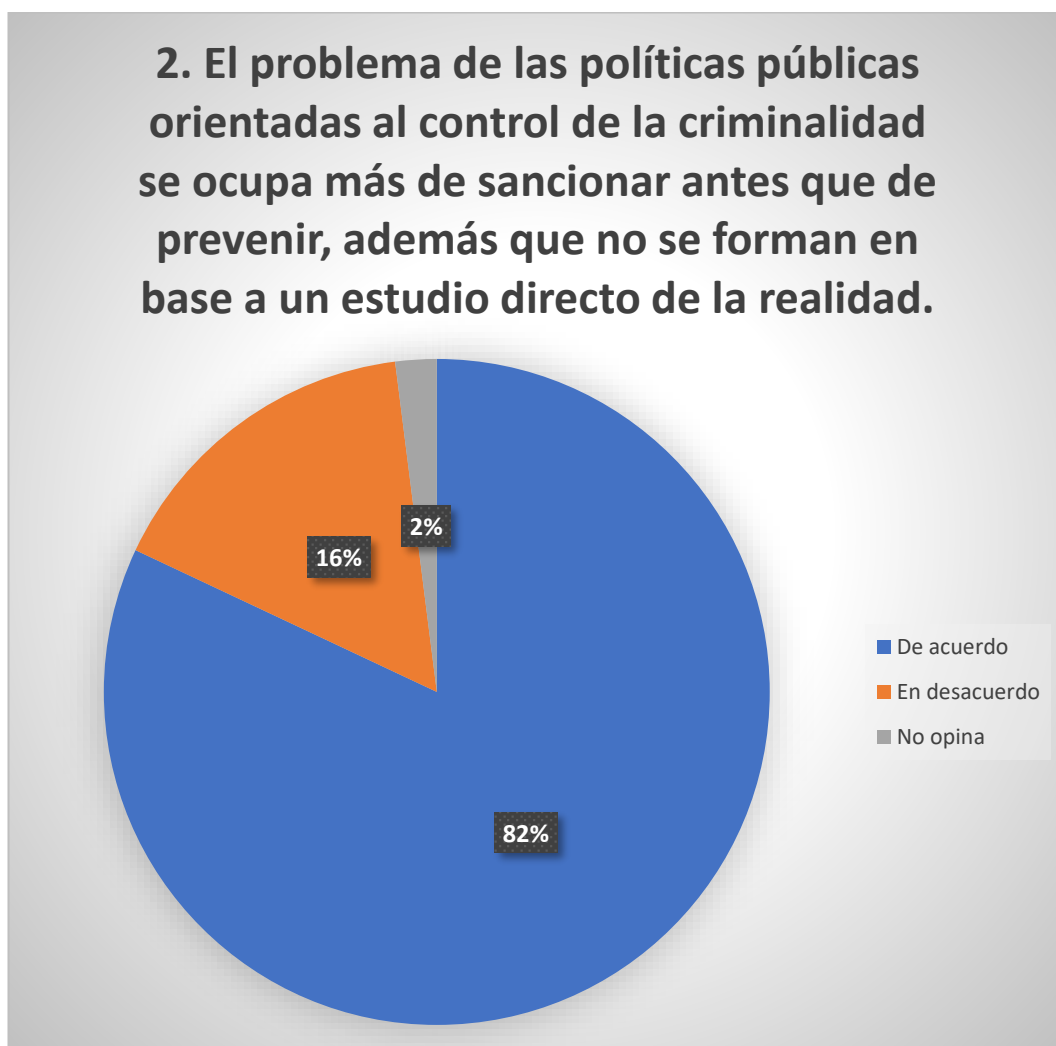
responsabilidad de generar una estrategia adecuada deviene en útil para la configuración de la política pública que permita con eficacia la acción limitativa no solo de los derechos a través de las sanciones sino que permita la prevención de la acción delictiva y como consecuencia de ello el equilibrio que proporciona la seguridad ciudadana.

*Tabla 3: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2.*

**2. El problema de las políticas públicas orientadas al control de la criminalidad se ocupa más de sancionar antes que de prevenir, además que no se forman en base a un estudio directo de la realidad.**

Opciones	Respuestas
De acuerdo	41
En desacuerdo	8
No opina	1
Total	50

*Ilustración 3: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 2.*



**OBSERVACIÓN:** tal cual se aprecia el elemento crítico planteado por esta investigación se valida en función a la opinión del 82% de los operadores jurídicos encuestados, lo que puede interpretarse como un problema derivado de la incorrecta interpretación y aplicación de las políticas públicas en el Perú, sobre todo en lo que interesa al derecho que significa la ruta para la creación de las leyes que deben someter al control estatal las inconductas generadas por determinados ciudadanos.

Esta inclinación de los operadores jurídicos sobre la crítica que se hace a la construcción de las políticas públicas permite validar la postura de la investigación dado que están corroborando la condición de ineficacia de las acciones que se

desarrollan a nivel de estrategia estatal que sólo se orientan a la intervención del ius puniendi del Estado. Ello implica el entendimiento de que la acción sancionadora no cumple una función preventiva, que además, la criminalización de las acciones delictivas deben estar sometidas a evaluaciones previas de la realidad a fin de que se consolide una correcta acción del Estado para generar control.

*Tabla 4: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3.*

**3. El origen de las estrategias que incorpora la política pública para ejercer control sobre los índices de criminalidad deben estar orientadas por los resultados que se obtengan del análisis de la realidad social creada por la criminología como ciencia.**

Opciones	Respuestas
De acuerdo	40
En desacuerdo	8
No opina	2
Total	50

*Ilustración 4: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 3.*



**OBSERVACIÓN:** en lo que se refiere al resultado porcentual de esta afirmación, se puede reconocer el nivel de validación que se muestra como el 80 % de los operadores jurídicos encuestados, así es como se entiende el sentido de la propuesta, esto es la necesidad de incorporar en los lineamientos de creación estratégica para las políticas públicas a la criminología como ciencia a fin de que aporte con el reconocimiento de los factores que promueven la comisión del delito.

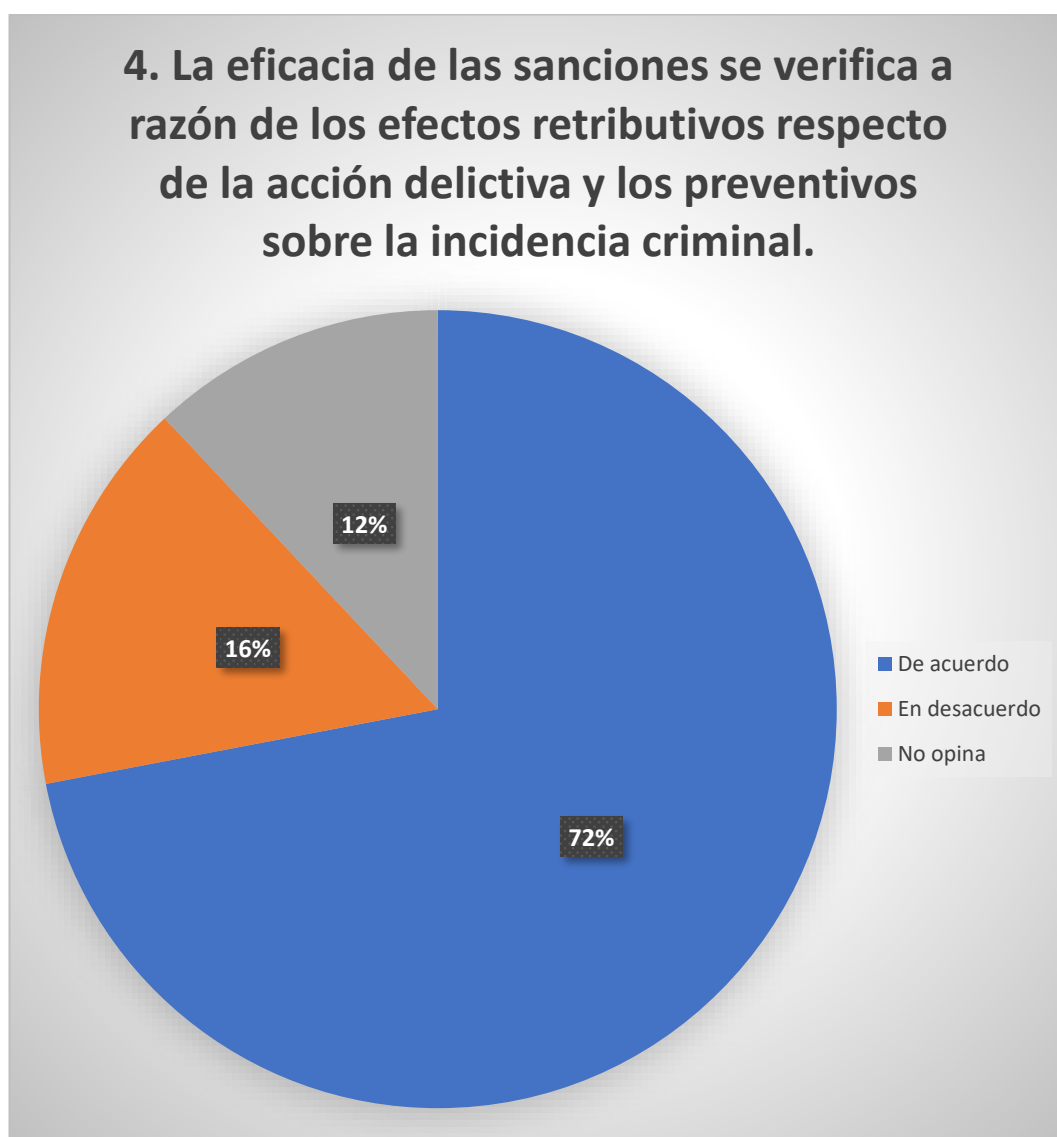
Esta propuesta se basa en el hecho de que la acción jurídica que promueve la creación del Derecho como regla, tiene su origen en la realidad social, por lo mismo que el delito de violación sexual ha de entenderse desde dicha perspectiva, es por ello importante esta propuesta debido a que la realidad que circunda a nivel social y todas sus relaciones respecto a la comisión de estas acciones delictivas deben ser observadas con detenimiento para promover acciones de intervención de parte del Estado a fin de generar control de manera previa a la sanción penal.

*Tabla 5: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4.*

**4. La eficacia de las sanciones se verifica a razón de los efectos retributivos respecto de la acción delictiva y los preventivos sobre la incidencia criminal.**

Opciones	Respuestas
De acuerdo	36
En desacuerdo	8
No opina	6
Total	50

*Ilustración 5: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 4.*



**OBSERVACIÓN:** Conforme se aprecia del resultado obtenido en esta afirmación que lanza un concepto que orienta al reconocimiento de la eficacia de las sanciones, la misma que se ha de establecer en razón de los dos indicadores más importantes, como son la retribución de la sanción y el nivel de incidencia de la acción delictiva, elementos que deben ser analizados con detenimiento en todos los delitos que se pretendan estudiar, aporte que resulta validado por el 72% de los expertos encuestados.

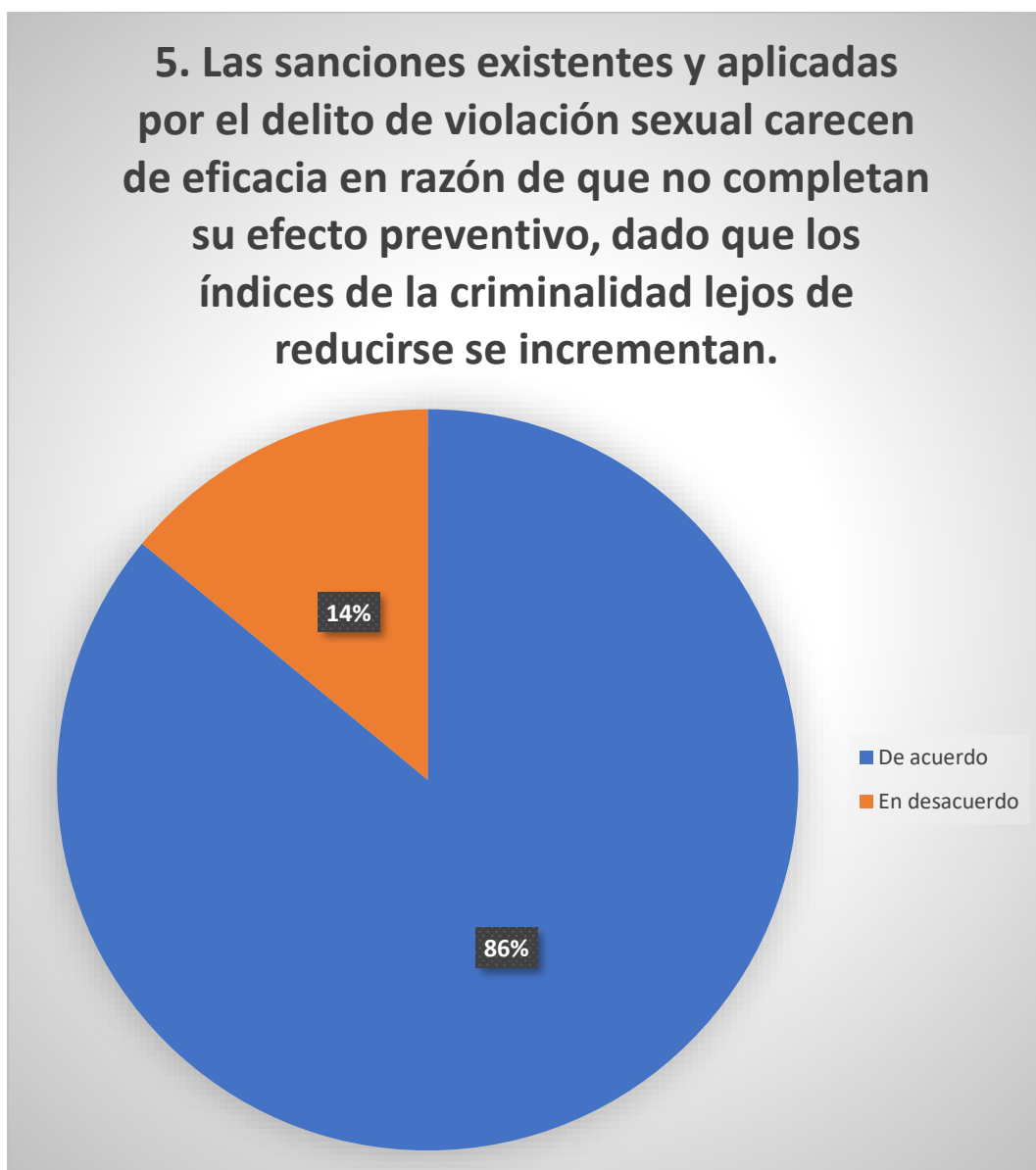
Siendo así, se valida también esta definición por parte de los expertos, debido a que la realidad muestra un nivel de incidencia bastante alto respecto a la comisión del delito de violación sexual en el Perú, por lo mismo que se debe tener asumir que el Estado no esta cumpliendo a cabalidad con su labor proteccionista respecto a la acción de este delito.

*Tabla 6: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5.*

**5. Las sanciones existentes y aplicadas por el delito de violación sexual carecen de eficacia en razón de que no completan su efecto preventivo, dado que los índices de la criminalidad lejos de reducirse se incrementan.**

Opciones	Respuestas
De acuerdo	43
En desacuerdo	7
No opina	0
Total	50

*Ilustración 6: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 5.*



**OBSERVACIÓN:** Según lo que se puede apreciar esta validación es respaldada por el 86% de la población experta encuestada, asumiendo que el sentido de la ineficacia preventiva del tipo penal de violación sexual se alcanza a reconocer en función a los índices de actuar delictivo que se verifican según los resultados estadísticos proporcionados por el sistema de información judicial.

Tal connotación se debe a que las acciones del Estado al momento de crear las políticas públicas, son incompletas, dada la ausencia de la comprensión respecto

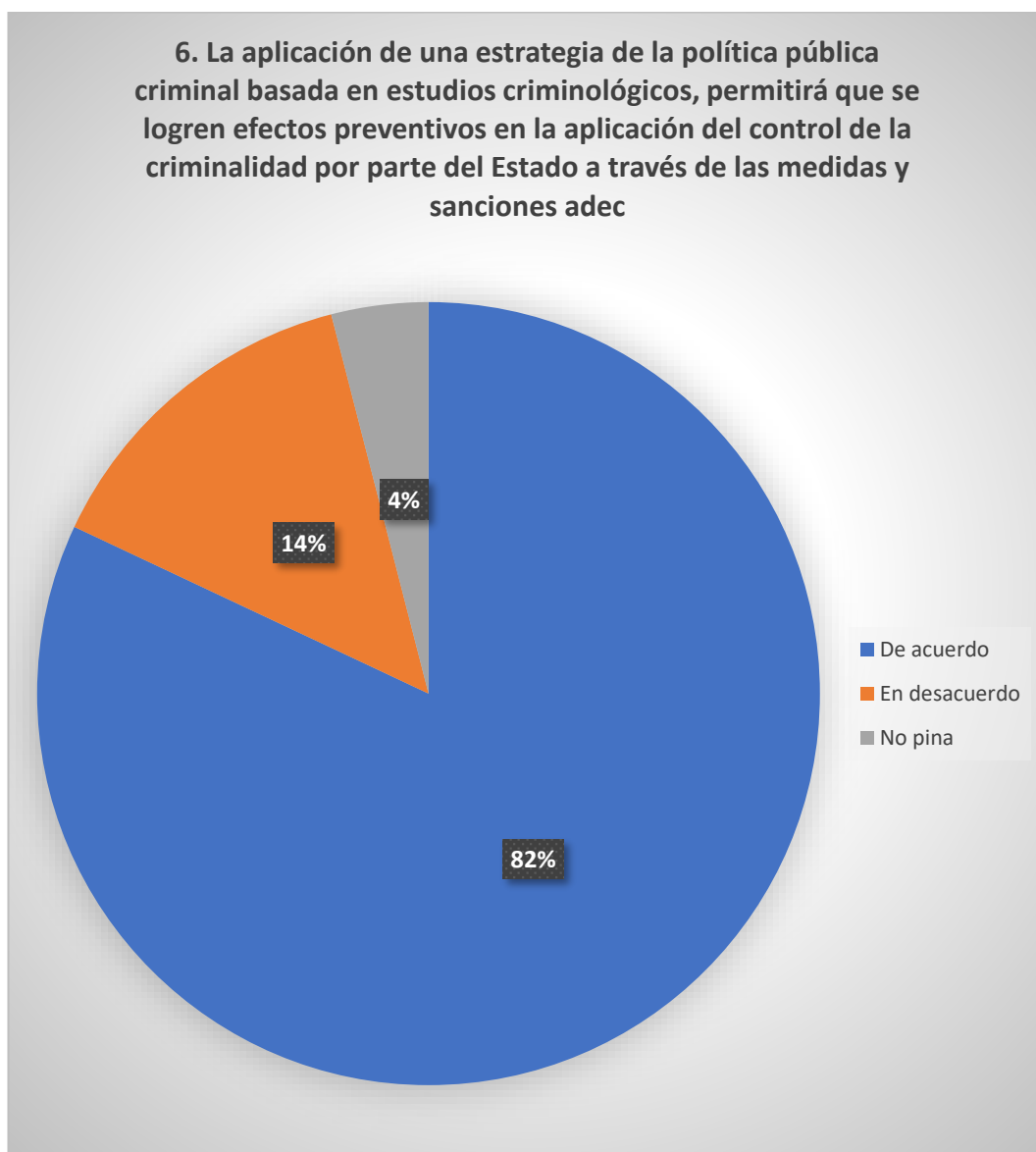
a la realidad social que se atraviesa antes de la comisión de este tipo de actos delictivos; si bien es cierto la verificación de los índices estadísticos son importantes para saber la cantidad de acciones delincuenciales, pero no deben ser el único factor que promueva la intervención del Estado, menos si se trata del último y más grave nivel de acción que es la sanción, puesto que limita derechos y no promueve de manera efectiva el fin de la sanción que es la resocialización además de la retribución.

*Tabla 7: esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6.*

**6. La aplicación de una estrategia de la política pública criminal basada en estudios criminológicos, permitirá que se logren efectos preventivos en la aplicación del control de la criminalidad por parte del Estado a través de las medidas y sanciones adecuadas.**

Opciones	Respuestas
De acuerdo	41
En desacuerdo	7
No opina	2
Total	50

*Ilustración 7: Gráfica sobre los porcentajes del esquema de la tabulación de resultados obtenidos al aplicar la encuesta sobre los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, respecto a la afirmación 6.*



**OBSERVACIÓN:** De acuerdo al resultado de los operadores jurídicos se aprecia la validación de estos expertos en el nivel de 82%, lo cual implica la adecuada formulación de la propuesta, que se inclina a sugerir la participación de la Criminología como ciencia a fin de reconocer los factores que promueven el delito y en base a ellos direccionar las estrategias públicas que conllevan a la creación de las reglas que sancionan dichas inconductas, lo cual implica un control sobre esta producción de sanciones, propiciando que el Estado ejerza control a través de medios alternativos y previos al ius puniendi.

## **CAPITULO V**

### **CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS**

Este capítulo tiene por finalidad conseguir la comprobación de la validez de aquella respuesta a priori que se hubo planteado al iniciar la investigación, por lo mismo que se organiza en función a su estructura, esto es a las variables que la componen, siendo así el inicio de la participación de estos últimos elementos es la construcción de los objetivos específicos que se han de entender como las metas de la investigación.

Estas labores orientadas por los objetivos permitieron llevar a cabo la incorporación de material teórico y el análisis de la realidad, el cual se ha discutido de manera independiente a fin de establecer una postura sobre cada una de las metas establecidas y con tales resultados, generar la validación de las variables que dieron origen a toda esta estructura a través de la síntesis de las determinaciones.

Finalmente lo obtenido como resultado de las validaciones de las variables se han unido para lograr una determinación final que se promueve como la postura conclusiva de la tesis, la misma que se contrasta con el planteamiento a priori a fin de corroborar el nivel de comprobación que se alcanzó con el desarrollo de la investigación.

#### **5.1. Discusión de los resultados.**

##### **5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la teoría de los fines de la pena en la doctrina penal nacional e internacional”**

De acuerdo al diseño de la investigación sólo se tendrá en cuenta el fenómeno que se conoce como fines de la pena desde una perspectiva de

observación, por ser esta un trabajo de tipo no experimental; tal verificación se inclina hacia los aspectos que definen la finalidad de la sanción penal, esto es las consecuencias que se espera de su intervención en la estructura legislativa y procesal.

Siendo así, es interesante reconocer la existencia de posturas que se orientan hacia la respuesta más idónea sobre ¿Cuáles son los fines de la pena?; de las cuales se puede identificar en primer lugar a la que señala como fin de la pena el carácter retributivo, lo cual implica que la sanción se determina en función al nivel de lesiones que se provocan sobre el bien jurídico protegido por el ordenamiento penal.

Tan es así que este carácter de retribución, en ocasiones ha sido duramente criticado en tanto se convierte en una cuestión de persecución, castigo o venganza sobre el sujeto que participa en una acción antijurídica y sancionable, pero la defensa de esta sindicación, es la necesidad de garantizar la firmeza del propio ordenamiento jurídico penal a fin de evitar que se resquebraje el respeto en su cumplimiento.

De otro lado se ubica la postura que hace referencia a la finalidad de la pena desde una perspectiva de prevención, la cual señala que se trataría de un efecto posterior a la aplicación de la sanción penal, como la condición mas fuerte de su acción, esto es lograr reprimir de alguna manera al infractor de la ley para que no vuelva a cometer la acción delictiva, siendo otra posibilidad de prevención la que señalan como aquella que se produce en base al propio contenido de la legislación penal, de la cual debe tener conocimiento exacto todo ciudadano y limitar sus acciones en función a ello.

Luego ante la presencia de estas concepciones respecto a la finalidad de la pena, se presenta en el panorama doctrinario una corriente unificadora que traslada a su construcción teórica las dos posturas anteriores, esto es que reconoce la finalidad de la pena tanto a nivel de retribución por la acción cuanto al nivel de la prevención que genera.

En función a lo descrito sobre las teorías que se ocupan de la finalidad de la pena, se debe indicar que cualquiera sea la finalidad de ésta, precisará de una estructura idónea para que se pueda configurar de manera adecuada no sólo la construcción de la misma en el catálogo de sanciones, sino además, su correcta aplicación a nivel jurisdiccional, elementos trascendentales que permitirán consolidar la viabilidad jurídica de los propios efectos que se espera de la intervención del ius puniendi.

Es por ello que en toda estructura normativa se requerirá de pautas específicas que promuevan una creación y aplicación adecuada, en ese sentido para poder evaluar el ordenamiento que se usa en el Perú para tal fin se debe cuestionar ¿Qué crítica se puede establecer respecto a la construcción normativa sancionadora en el derecho penal?; ante lo cual se debe señalar una de las características principales que debe estar contenida en la estructura normativa sancionadora es la proporcionalidad, esto es en las reglas penales que incorporan restricción de derechos como es el caso de la libertad personal.

Tal proporcionalidad permitirá que las sanciones que se muestran en cada uno de los tipos penales como respuesta del Estado ante el delito, sea lo suficientemente equitativa en relación al daño causado, interés primordial que debe ser controlado de manera eficaz, condición que no se observa en la totalidad del

esquema sancionador penal, dado que no se advierten en totalidad los efectos que antes se han señalado respecto a las penas.

Este elemento característico, al no encontrarse de manera totalizadora en la estructura de sanciones penales, trae como consecuencia un problema desequilibrante de la realidad social que se ve afectada por la incidencia de las acciones delictivas, ello a consecuencia de la incorrecta configuración de las políticas públicas que se sólo se basan en estadísticas y la opinión pública, mediante lo cual comprende un problema exacerbado respecto a la delincuencia, tomando como principal o hasta única estrategia, el uso del derecho penal como herramienta para satisfacer la sensación de seguridad ciudadana por parte de la población.

Tal concepción se basa en la errónea de idea de que a mayor sanción menor será el índice delictivo, lo cual obedece a la consideración del fin preventivo que le corresponde a la pena, en este marco explicativo es prudente hacer la siguiente interrogante: ¿cuán efectivo resulta el fin preventivo de la pena?, que según lo ya indicado aún cuando se acepte su existencia, será bajo condiciones mínimas de efectividad, puesto que la cuestión preventiva se aprecia como un carácter subjetivo, ya que aplica sobre la intención del sujeto para cometer la acción delictiva.

Entonces, la política de incrementar el nivel de las sanciones, no resulta una medida adecuada para lograr lo que se supone sería la eliminación de los índices delictuales que se manifiestan de manera ascendente a través de los tiempos; ante ello resulta apropiado recalcar el hecho de que hablar de un fin preventivo de la sanción sólo se puede reconocer en razón del efecto que produce sobre el sancionado, esto es que luego de ejecutarse la pena, tendría el Estado que observar

y promover el efecto resocializador que sí tendría el carácter preventivo, en caso de materializarse de manera adecuada.

#### TOMA DE POSTURA:

Los fines de la pena no son otros que los objetivos que se buscan conseguir mediante su imposición, dichos objetivos o fines son: la retribución, la prevención y la rehabilitación.

El sistema de rehabilitación social es la mejor opción para tratar a una persona que ha cometido un delito, reconociéndose su responsabilidad penal mediante sentencia firme, donde se entiende que la condición sancionadora sería la principal finalidad; Desde ese punto de vista entonces se puede consolidar una postura más que sindical como única función o finalidad de las penas, aquella que traería como consecuencia la resocialización como producto de las acciones que se hayan desarrollado en el proceso del cumplimiento de la sentencia, esto es durante el internamiento del sujeto que ha delinquido a fin de que cumpla con la sanción y reciba un tratamiento adecuado para alcanzar ser reinsertado en la sociedad.

“La función que cumple la pena está presente en cada momento de su existencia, desde la conminación de la pena (al elaborar la norma penal), su aplicación judicial y la ejecución de la pena” (Luzón Peña, 1976, pág. 11).

En la conminación, se aplica la función preventiva general de la pena, ya que se informa a la ciudadanía de la sanción penal que acarrearía la vulneración de bienes jurídicos. Mientras que, en la aplicación judicial, por un lado, el Estado reafirma su rol sancionador en pro de la protección de bienes jurídicos y, por otro, busca desincentivar al delincuente de la posibilidad de delinquir.

5.1.2. Discusión sobre: “Describir la estructura de la política pública de lucha contra el crimen en el Perú desde una perspectiva crítica del desarrollo del control criminal”

En lo que se refiere a la estructura de la política pública en el Perú, interesa para esta investigación conocer el lineamiento de su ejecución, pero, previo a ello, será preciso conocer ¿Qué son las políticas públicas?, ante tal cuestionamiento, se debe señalar que estas se asumen como el conjunto de estrategias que se plantea el Estado con el fin de ejercer control sobre ciertos ámbitos de la gestión, amparados en la necesidad que se pueda advertir de la realidad social.

Esto quiere decir, que los lineamientos de acción de parte del Estado implican la presencia de un conocimiento previo de la realidad, que orientará el sentido de las estrategias antes señaladas, por lo que se puede asumir que se trata de una labor ejecutada de la manera más especializada posible, desde luego atendiendo a los ámbitos más importantes del desarrollo social y humano; es así como se consolidan las secciones del poder Ejecutivo del gobierno para que mediante sus carteras ministeriales se ocupen del control de cada uno de estos sectores.

Partiendo de la idea que representa la responsabilidad del Estado para la consolidación de tales estrategias, interesa conocer ¿cuál es la estructura de la política pública?, por lo mismo que de manera general se puede señalar como la parte inicial que constituye su estructura, el reconocimiento de un problema social en determinado ámbito de la colectividad, por lo mismo que este elemento requerirá de la intervención del Estado, para que de manera previa se realicen los estudios necesarios con la especialidad pertinente a fin de que se genere un resultado que

brinde a la gestión, el dato preciso de los factores que causan el problema a fin de poder atenderlos de manera estratégica.

Para un segundo momento de la estructura que corresponde a las políticas públicas, se ha de comprender a la decisión estratégica que ha de asumir el Estado para la ejecución de las acciones pertinentes a fin de atender la necesidad social y con ello desde luego lograr la satisfacción de la opinión pública y como efecto directo completar el sentido de la gobernabilidad.

Finalmente se puede hacer la indicación de un tercer momento en la estructura de las políticas públicas, en tanto que se referirá a la fiscalización de la efectividad del control que se presume resulta ser la finalidad de este tipo de estrategias que se presume propenden a la solución de los problemas sociales.

Atendiendo a la realidad que envuelve a la criminalidad dentro de todo tipo de sociedad, se requiere del establecimiento de líneas de acción que permitan su control, es así, que interesa saber ¿Qué potestad permite que el Estado se ocupe de la lucha contra el crimen?, saltando a la realidad jurídica el Ius Puniendi que será la potestad sancionadora en base a la cual se crea una estructura sistémica para consolidar el carácter de persecución que se entabla sobre este comportamiento antijurídico dentro del esquema social.

Si bien es cierto, que la potestad sancionadora aplica directamente sobre el crimen en la sociedad, debe comprenderse también que la potestad de control que tiene el Estado, se basa en la garantía constitucional de la seguridad ciudadana, que si bien es cierto comprende de manera directa la ejecución de acciones en base al uso de instrumentos institucionales como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dependiendo del ámbito de aplicación; entonces esta condición en lo que

corresponde al Estado, amplía esta garantía para que sea trasladada hacia la política pública a fin de aplicar las medidas más idóneas para asegurarla.

Siendo así, la seguridad ciudadana no sólo tendrá que apoyar al control del crimen, sino que requerirá que el Estado acciones actividades que proyecten prevención respecto a la comisión de acciones delictivas en la sociedad; por lo mismo que según lo detallado hasta ahora en la tesis, se puede advertir que existen medidas alternativas previas para consolidar líneas de acción que permitan más que sancionar, prevenir.

Esta condición preventiva respecto a la acción criminal, requiere de la participación de especialistas para que se reconozca el verdadero factor o factores que están provocando la incidencia criminal, lo cual se puede medir ante la observación de la eficacia estratégica que se plantea el Estado, por lo que se requiere conocer además ¿Qué tan efectivo es el control de la criminalidad en el Perú, partiendo de las políticas públicas?

Tal cual se aprecia de la realidad jurídico social, las gestiones que se han ido suscitando a lo largo de la historia, sólo ha tenido en cuenta la aplicación de estrategias que se ciñen al uso del derecho, con especial atención al ámbito que le da potestad para sancionar, a efectos de conseguir una estructura masiva en cuanto a represión del crimen, lo cual conlleva a la observación del riesgo de sobre criminalización.

Esto último se convierte en una situación muy peligrosa para el correcto funcionamiento de la sociedad, más aún teniendo en cuenta la estructura garantista que opera en función a la Carta Magna, que precisamente señala límites para el ejercicio de dicha potestad, restringe la aplicación de sanciones o el uso del ius

puniendi en tanto no se supere los límites establecidos por las garantías constitucionales.

Además de esta garantía expresa, debe indicarse también que la acción del Estado para sancionar opera sobre otro límite que señala al derecho penal como la última medida a ser aplicada para la solución de un problema o conflicto social, así pues, el sentido de protección que asiste a todos los ciudadanos, requiere que la política pública que se ocupa de la seguridad ciudadana buscando controlar el crimen, deberá asumirse en función a dichos lineamientos.

Desde esta perspectiva, se puede indicar que la acción de la política pública para luchar contra el crimen no surte los efectos esperados en razón del incumplimiento de su estructura para construirla, primero y luego que no observa otro tipo de acciones que no sea la sanción del derecho penal, para lograr la prevención de las acciones delictivas.

#### TOMA POSTURA:

Las acciones estatales a través de la generación estratégica para la lucha contra el crimen no siempre ha sido bien calificada puesto que los índices de criminalidad no han tenido una reducción adecuada, En definitiva, se ve cómo es que la política pública que se origina en el propio sentir de la población que parte de la existencia de problemas sociales , ya que a partir de la existencia de aquellos y el reconocimiento de sus aspectos principales y la realidad jurídica que se produce en torno al problema, se puedan generar de manera idónea las acciones a seguir por la gestión.

Por lo cual resulta importante entender que se encuentra en la responsabilidad del propio Estado el hecho de que las medidas a tomar tengan una

relación directa con la identificación exacta de las causas que promueven los problemas sociales.

Que, de las actividades estatales que se han generado en función a un punto específico de la criminalidad, tal es el caso de las violaciones sexuales, que sin duda es de fácil verificación que los índices cada vez suben en el rango de medición anual, por ello será necesario reconocer que la políticas públicas utilizadas por el Estado están basadas en la realidad social , ya que la violación sexual es un crimen que afecta tanto a la integridad física como mental de las personas en las cuales es infligida, así como también sus relaciones sociales y familiares dependiendo de su contexto cultural.

#### 5.1.3. Discusión sobre: “Analizar la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual en el distrito judicial de Lambayeque y su efecto en los índices de criminalidad”

De acuerdo a lo señalado en la proyección de esta tesis, la observación de la realidad que impera sobre el criterio manejado a nivel jurisdiccional sobre la aplicación de sanciones por el delito de violación sexual, habría de recurrirse a la institución del Poder Judicial con el fin de recopilar la data que permitiera evidenciar tanto el nivel de incidencia respecto a este delito, lo cual se hizo a través de la oficina del Sistema de Información Judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

¿Cuán adecuada fue la atención de parte del Poder Judicial sobre la data informativa?, según se puede apreciar el sistema de información antes mencionado, cumplió con entregar la información estadística que permitió asimilar el nivel de

incidencia que se presenta respecto al delito de violencia sexual, así se tuvieron como resultado un número importante respecto al comportamiento delictivo en el Distrito Judicial de Lambayeque, tabulación que permitió reconocer de la amplia gama de sub tipos penales en los que se altera el correcto desarrollo de la libertad sexual de un individuo, la incidencia de dos tipos en forma mayoritaria.

¿Cuál es la mayor incidencia delictiva sobre el tipo penal de violación sexual en el distrito judicial de Lambayeque?

De acuerdo al análisis realizado entre los años 2016 al 2020, se ha podido verificar dos grandes porcentajes respecto a la incidencia de dos de los sub tipos penales existentes relacionados con la libertad sexual, esos son en un porcentaje de 43% sobre el tipo base de violación sexual y por otro lado un 32 % respecto al tipo de violación de menores de edad, lo cual implica una alta tasa delictiva que atenta la libertad en este ámbito tan particular que representa la sexualidad, llamando seriamente la atención aquello que se relaciona con la violación de menores de edad.

¿Cuán efectiva se puede reconocer la intervención del Estado para lograr el control o disminución del índice delictivo de violación sexual?

Tal cual se puede apreciar en el recojo de la información, la intervención estatal no es lo suficientemente satisfactoria, en tanto y en cuanto se aprecia que el índice resulta ser bastante alto en lo que se refiere a la comparación con los otros tipos de delitos desarrollados en el distrito judicial; por lo mismo que se deberían tomar como referencia los datos específicos a fin de que surja una postura de apoyo para que se promuevan políticas públicas estatales que intervengan con estrategias válidas a fin de lograr la disminución de estas tasas delictivas, lo cual se puede lograr con la aplicación de mecanismos preventivos, puesto que como ya se ha

demostrado anteriormente, el derecho penal no debe ser la única herramienta que se utilice para solucionar el problema social, mas bien de estar en el último nivel de acción.

¿cuán validadas son las posturas de esta investigación de parte de los expertos en la materia?

Como bien se ha explicado, con el fin de reconocer el nivel de validación de las posturas de esta investigación, se aplicó una encuesta de opinión, la misma que se ha construido en base a las variables como ejes de la investigación, siendo así ésta fue aplicada a los expertos sobre el tema, estos son los operadores jurídicos de los juzgados penales de la ciudad de Chiclayo, de cuyos resultados se ha podido evidenciar que:

Sobre la postura de que: El origen de las estrategias que incorpora la política pública para ejercer control sobre los índices de criminalidad deben estar orientadas por los resultados que se obtengan del análisis de la realidad social creada por la criminología como ciencia; se ha podido reconocer el nivel de validación que se muestra como el 80 % de los operadores jurídicos encuestados, así es como se entiende el sentido de la propuesta, esto es la necesidad de incorporar en los lineamientos de creación estratégica para las políticas públicas a la criminología como ciencia a fin de que aporte con el reconocimiento de los factores que promueven la comisión del delito.

De otro lado sobre la intervención del Estado se ha implicado la postura siguiente: La aplicación de una estrategia de la política pública criminal basada en estudios criminológicos, permitirá que se logren efectos preventivos en la aplicación del control de la criminalidad por parte del Estado a través de las medidas

y sanciones adecuadas; de la cual se observa que los operadores jurídicos como expertos validan el planteamiento en el nivel de 82%, lo cual implica la adecuada formulación de la propuesta, que se inclina a sugerir la participación de la Criminología como ciencia a fin de reconocer los factores que promueven el delito y en base a ellos direccionar las estrategias públicas que conllevan a la creación de las reglas que sancionan dichas inconductas, lo cual implica un control sobre esta producción de sanciones, propiciando que el Estado ejerza control a través de medios alternativos y previos al ius puniendi.

#### TOMA DE POSTURA:

El análisis de la realidad como lo es el reconocimiento de la situación delincencial sumado a la verificación de las posturas de esta investigación por parte de los expertos, esto es la validación de su sentido; ha permitido corroborar que respecto al punto de la realidad jurisdiccional, es verificable la incidencia en casos de violación respecto de menores de edad, lo cual sin duda requiere de la especial atención del Derecho como regla de manera general.

De otro lado respecto a la validación de las posturas, se aprecia de los porcentajes obtenidos, el 84% de la población encuestada indica que está de acuerdo con el reconocimiento de un manejo adecuado del entendimiento sobre las políticas públicas.

El control de la actividad criminal se convierte en una obligación estatal, de allí la responsabilidad de generar una estrategia adecuada para la configuración de la política pública que permita con eficacia la acción limitativa no solo de los derechos a través de las sanciones sino que permita la prevención de la acción

delictiva y como consecuencia de ello el equilibrio que proporciona la seguridad ciudadana.

5.1.4. Discusión sobre: “Proponer un lineamiento estratégico para determinar la realidad problemática a través de la criminología, a fin de generar una política pública eficiente sobre el control de los índices de violación sexual”

Como se ha podido verificar en el transcurso de la discusión generada sobre este tema de investigación, la sanción que se aplica en virtud de la acción delictiva contra el bien jurídico tutelado, libertad sexual, que se define como violación sexual, no resulta del todo eficaz para lograr los fines de la pena en primer lugar y en segundo lugar para lograr la efectividad de la política pública que ha generado el Estado con el fin de controlar y prevenir este tipo de delitos.

Es en virtud a ello que se ha plasmado como idea central de la propuesta la incorporación de lineamientos específicos a manera de propuesta para la identificación de los factores que en la realidad social y jurídica que se experimenta, con lo cual se pueda plasmar la verdadera secuencia de factores que permitan reconocer las causas de la incidencia de este delito y le permitan al Estado actuar

sobre ellas a fin de generar estrategias que se ocupen de propiciar control sobre la acción delictiva a fin de lograr la tan ansiada prevención.

Para tal efecto se ha podido reconocer como la medida más apropiada, a la utilización de la criminología que a través de su intervención científica relacionada con el aspecto social, permita en la realidad el reconocimiento de los factores que promueven la comisión de este tipo de delitos; así pues, según lo establecido por esta ciencia que tiene un carácter multidisciplinario, existen factores de diversa índole, tanto así que se encuentran lineamientos psicológicos, culturales, económicos y demás aspectos que conllevan a un determinado sujeto a la realización de estas acciones delictivas en contra de sus víctimas. Es por ello que el Estado debe prestar atención a la intervención de esta ciencia como un factor a priori en la construcción de las políticas públicas, a fin de que no se opte en primera línea por el delito de violación sexual.

Entre estos parámetros específicos que se reconocen a través de la observación de esta ciencia multidisciplinaria como lo es la criminología y la determinación de esta tesis que indica un alto nivel de incidencia sobre el delito de violación sexual sobre menores de edad; será importante que el análisis de la realidad identifique los factores que promueven el delito de violación, partiendo del aspecto cultural para llegar a factores como el económico y social; circunstancias que permitirán crear los parámetros específicos de actuaciones previas por parte del Derecho, antes de la intervención del Ius Puniendi.

Para el primer caso, el aspecto cultural se podrá determinar con el estudio de las capacidades de percepción de parte de la población que tiene mayor incidencia en este tipo de delitos que atentan contra la libertad sexual, para lo que se requiere que la política estatal analice tal situación para que forme parte del

criterio estratégico que ha de formular para la solución de este problema jurídico social.

En segundo lugar se puede reconocer al aspecto económico como uno de los factores de necesaria atención, puesto que se relaciona con la situación laboral y en consecuencia de ello el poder adquisitivo de la colectividad y en especial de los individuos, para enfocar la verificación a fin de reconocer si existe relación con esta condición; es decir si las personas que cometen este delito tienen como elemento en común el nivel económico o la ausencia de empleo y por lo tanto ingresos escasos o nulos. Ello permitirá la toma de acciones en el sector que más requiere de atención, e incluso podría tomarse como punto de partida para la incorporación de sanciones específicas que se oriente a la exigencia del propio ejecutivo de prestar atención a este sector respecto a la solución del problema de empleo, a fin de propiciar la reducción del nivel de influencia de este factor sobre la comisión del delito de violación sexual.

Otro de los factores que determinarían parámetros específicos sería la cuestión psicológica tanto del agresor así como de la víctima, por lo mismo que se podría identificar si es posible orientar un cuidado generalizado de este aspecto a cargo del Estado en primer lugar; mientras que de otro lado podría ayudar al reconocimiento de la justificación jurídica que en relación a la psicología permitió que se incorporara el consentimiento para las relaciones sexuales con menores entre 14 y 18 años; ello sería de mucha importancia puesto que la crítica no sólo va a la criminalización de la conducta sino a las condiciones que en la estructura del tipo estarían provocando impunidad innecesaria, dado que no se ha realizado un análisis adecuado para la configuración de la política pública que viabilizó tal permisibilidad.

Finalmente el factor social es trascendental para la consolidación de una correcta acción de la política pública orientada al control criminal, puesto que el origen de la intervención del derecho es precisamente la condición social en la que se trasladan estas acciones, así pues el Estado interviene mediante el Derecho para controlar la actividad social o las interrelaciones, siendo así, en dicho camino se encuentra con la necesidad de intervenir con el fin de sancionar, lo cual habrá de restringirse hasta el final de la acción estatal. Es por ello que el reconocimiento del nivel social es trascendental para la creación de una estrategia adecuada para la solución del problema de la violación sexual como un delito de gran incidencia.

Toma de postura:

Luego de advertir la necesidad de implementar una política pública adecuada que se ocupe del control de la actividad criminal respecto a la violación sexual, en base a la determinación teórica sobre los fines de la pena que sólo logra la resocialización con la ejecución de la sanción y que dada la condición deficiente en la que se encuentra el sistema penitenciario; se ha logrado establecer que la forma más viable para lograr tal fin, sería la incorporación de la criminología como ciencia para lograr el reconocimiento del problema en la realidad, el cual será usado como punto de partida de la estrategia de control de la seguridad ciudadana.

El planteamiento requiere de la puntualización de parámetros específicos, que se relacionan en primer lugar con el sentido cultural para que el Estado intervenga de manera general para provocar cambios a ese nivel, luego el reconocimiento de la situación económica en el sector donde se producen este tipo de crímenes para las acciones correspondientes. Además de ello otro de los parámetros sería la verificación de los elementos psicológicos que permitieron la incorporación del consentimiento en el caso de violación de menores entre 14 y 18

años, tipo específico en el que se aprecia el nivel más alto de incidencia sobre esta acción criminal; siendo por último el parámetro social el que tendría que ser revisado por el Estado para consolidar una política de origen de la intervención del derecho con acciones previas antes de la participación del ius puniendi.

## **5.2. Las variables y su validación**

De acuerdo al diseño de la investigación no experimental en su enfoque cualitativo que muestra los aspectos de la observación sobre un problema en la realidad como es el caso de la ineficacia de la acción de los tipos penales sobre violación sexual para conseguir la prevención de las acciones delictivas de este tipo, se requiere del reconocimiento de la validez de los conceptos que representan las variables que dieron inicio a la investigación.

Esta labor de validación se hace en función a la síntesis de las posturas alcanzadas luego de la discusión de cada una de las metas que se trazaron en esta investigación, dichos contenidos ordenados en función de la estructura de las variables iniciales se convierten en el argumento que permite establecer un criterio final o validación de dichas variables, lo cual se plasma a continuación.

### **5.2.1. Sobre la variable independiente: “La política pública orientada al control criminal”**

Ha de tenerse presente el hecho de que el concepto que se incorpora mediante esta variable es de naturaleza estática puesto que esta compuesta en la realidad por una secuencia de estrategias establecidas por el Estado a fin de conseguir controlar la actividad del crimen y con ello alcanzar el tan ansiado control que le corresponde. Esta condición permite reconocerla mas bien como el concepto que hace las veces de la causa del problema en la relación con la estructura del problema advertido sobre la ineficacia de las sanciones por el delito de violación sexual; por lo mismo que se hará uso de la postura a la que se arriba en función a lo discutido en la investigación.

De acuerdo a ello se ha considerado el primer aspecto relacionado con la política pública que se orienta al control criminal, que es precisamente la intervención del Estado mediante el ius puniendi cuya función es la aplicación de sanciones, por lo mismo que debe quedar en claro los fines de la pena, que se asumen como los objetivos que se buscan conseguir mediante su imposición, dichos objetivos o fines son: la retribución, la prevención y la rehabilitación.

El sistema de rehabilitación social es la mejor opción para tratar a una persona que ha cometido un delito, reconociéndose su responsabilidad penal mediante sentencia firme, donde se entiende que la condición sancionadora sería la principal finalidad; Desde ese punto de vista entonces se puede consolidar una postura más que sindical como única función o finalidad de las penas, aquella que traería como consecuencia la resocialización como producto de las acciones que se hayan desarrollado en el proceso del cumplimiento de la sentencia, esto es durante el internamiento del sujeto que ha delinquido a fin de que cumpla con la sanción y reciba un tratamiento adecuado para alcanzar ser reinsertado en la sociedad.

“La función que cumple la pena está presente en cada momento de su existencia, desde la conminación de la pena (al elaborar la norma penal), su aplicación judicial y la ejecución de la pena” (Luzón Peña, 1976, pág. 11).

En la conminación, se aplica la función preventiva general de la pena, ya que se informa a la ciudadanía de la sanción penal que acarrearía la vulneración de bienes jurídicos. Mientras que, en la aplicación judicial, por un lado, el Estado reafirma su rol sancionador en pro de la protección de bienes jurídicos y, por otro, busca desincentivar al delincuente de la posibilidad de delinquir.

Las acciones estatales a través de la generación estratégica para la lucha contra el crimen no siempre ha sido bien calificada puesto que los índices de criminalidad no han tenido una reducción adecuada, En definitiva, se ve cómo es que la política pública que se origina en el propio sentir de la población que parte de la existencia de problemas sociales , ya que a partir de la existencia de aquellos y el reconocimiento de sus aspectos principales y la realidad jurídica que se produce en torno al problema, se puedan generar de manera idónea las acciones a seguir por la gestión.

Por lo cual resulta importante entender que se encuentra en la responsabilidad del propio Estado el hecho de que las medidas a tomar tengan una relación directa con la identificación exacta de las causas que promueven los problemas sociales.

Se puede apreciar de las actividades estatales que se han generado en función a un punto específico de la criminalidad, tal es el caso de las violaciones sexuales, que sin duda es de fácil verificación que los índices cada vez suben en el rango de medición anual, por ello será necesario reconocer que la políticas públicas utilizadas por el Estado están basadas en la realidad social , ya que la violación sexual es un crimen que afecta tanto a la integridad física como mental de las personas en las cuales es infligida, así como también sus relaciones sociales y familiares dependiendo de su contexto cultural.

Luego de advertir la necesidad de implementar un política pública adecuada que se ocupe del control de la actividad criminal respecto a la violación sexual, en base a la determinación teórica sobre los fines de la pena que sólo logra la resocialización con la ejecución de la sanción y que dada la condición deficiente en la que se encuentra el sistema penitenciario; se ha logrado establecer que la forma

más viable para lograr tal fin, sería la incorporación de la criminología como ciencia para lograr el reconocimiento del problema en la realidad, el cual será usado como punto de partida de la estrategia de control de la seguridad ciudadana.

En función a todo lo reconocido del análisis se requiere de la puntualización de parámetros específicos, que se relacionan en primer lugar con el sentido cultural para que el Estado intervenga de manera general para provocar cambios a ese nivel, luego el reconocimiento de la situación económica en el sector donde se producen este tipo de crímenes para las acciones correspondientes. Además de ello otro de los parámetros sería la verificación de los elementos psicológicos que permitieron la incorporación del consentimiento en el caso de violación de menores entre 14 y 18 años, tipo específico en el que se aprecia el nivel más alto de incidencia sobre esta acción criminal; siendo por último el parámetro social el que tendría que ser revisado por el Estado para consolidar una política de origen de la intervención del derecho con acciones previas antes de la participación del ius puniendi; de acuerdo a lo reseñado, la variable en estudio se valida mediante la siguiente indicación:

**Las estrategias de la política pública orientada al control criminal son ineficaces porque no se basan en el reconocimiento de la realidad social**

#### **5.2.2. Sobre la variable dependiente: “La eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual”**

En lo que corresponde a la identificación del sentido que valida esta variable, debe ceñirse la atención al origen de este concepto, puesto que se comporta como un elemento dinámico, ya que se trata de un efecto, el mismo que se ha medido en función a los resultados obtenidos a través de la investigación, por lo

mismo que se complementa con las determinaciones a las que se arriban según los objetivos específicos que se han discutido y se relacionan directamente con el nivel de eficacia de los tipos penales que aplican sanciones por el delito de violación sexual.

El análisis de la realidad como lo es el reconocimiento de la situación delincencial sumado a la verificación de las posturas de esta investigación por parte de los expertos, esto es la validación de su sentido; ha permitido corroborar que respecto al punto de la realidad jurisdiccional, es verificable la incidencia en casos de violación respecto de menores de edad, lo cual sin duda requiere de la especial atención del Derecho como regla de manera general.

De otro lado respecto a la validación de las posturas, se aprecia de los porcentajes obtenidos, el 84% de la población encuestada indica que está de acuerdo con el reconocimiento de un manejo adecuado del entendimiento sobre las políticas públicas.

El control de la actividad criminal se convierte en una obligación estatal, de allí la responsabilidad de generar una estrategia adecuada para la configuración de la política pública que permita con eficacia la acción limitativa no solo de los derechos a través de las sanciones sino que permita la prevención de la acción delictiva y como consecuencia de ello el equilibrio que proporciona la seguridad ciudadana; en razón a estas determinaciones se puede establecer la validación de la variable independiente bajo la siguiente construcción:

**Las sanciones por el delito de violación sexual no son eficaces porque no logran disminuir el índice criminal**

### 5.3. Contrastación de hipótesis

Dada la síntesis que se ha logrado establecer para corroborar el sentido de la hipótesis inicial, se ha de tener en cuenta que la construcción de la misma se basó en la unión de las variables de la investigación, las mismas que han sido validadas mediante afirmaciones como resultado; es por ello que a fin de crear una determinación con el carácter científico que otorga dicha síntesis de las posturas, se unen tales validaciones para tal propósito, lo cual se muestra de la siguiente manera:

**Las estrategias de la política pública orientada al control criminal son ineficaces porque no se basan en el reconocimiento de la realidad social; en consecuencia, se observa que las sanciones por el delito de violación sexual no son eficaces dado que no logran disminuir el índice criminal.**

De acuerdo a esta construcción se debe generar la observación de los aspectos que se prueban con la determinación final en relación a lo resuelto por la respuesta a priori de la investigación, para lo cual se construye el siguiente cuadro:

Cuadro de contrastación de las hipótesis	
Respuesta a priori	Respuesta final
Si, el examen de la estructura de la política pública de control criminal, permite verificar que no se ajusta a la realidad jurídica y social; entonces, se deberá proponer una nueva orientación para lograr la eficacia de la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual	Las estrategias de la política pública orientada al control criminal son ineficaces porque no se basan en el reconocimiento de la realidad social; en consecuencia, se observa que las sanciones por el delito de violación sexual no son eficaces dado que no logran disminuir el índice criminal

¿qué aspectos de la hipótesis inicial se contemplan en la final?

Que las estrategias de políticas públicas, tanto como su estructura o su aplicación no se basan en la realidad social, esto conlleva a un problema exacerbado ya que no cumple con su finalidad, la misma que es la disminución de la delincuencia o en este caso el índice delictivo que afecta al bien jurídico tutelado como es el la libertad sexual, ya que en lugar de basarse en estrategias preventivas para poder de ese modo tratar de frenar estos hechos aberrantes, es que solo se han dedicado a aplicar el ius puniendi, esto quiere decir que solo se han preocupado por sancionar el delito cometido, más no por resocializar al que delinque, transmitiendo de ese modo a la sociedad solo la sanción por el hecho delictivo cometido en consecuencia de la vulneración de un bien jurídico, cuando lo que se debería de transmitir es la protección de la ciudadanía, ello al desincentivar al delincuente de la posibilidad de delinquir.

¿Cómo se soluciona el problema planteado con la hipótesis final?

De lo planteado en la hipótesis final, se solucionaría el problema identificado si es que el Estado basa sus estrategias de la Política Pública Criminal en estudios criminológicos para que de ese modo se puedan lograr efectos preventivos respecto a la aplicación del control de la criminalidad, ya que se estarían aplicando sanciones adecuadas, porque de esa manera se estaría estudiando a los factores que generan que una persona se inducida a cometer este hecho delictivo y basándose en ello, plantear estrategias que vayan acorde con la realidad de la sociedad, ya que de esa manera se trataría la ejecución de las mismas de forma

específica y de ese modo el Estado ejerza políticas públicas preventivas y no basarse o no esperar a llegar a la aplicación del ius puniendi.

## CONCLUSIONES

### Primera:

Se ha logrado concluir en base al desarrollo de la teoría de los fines de la pena en la doctrina penal nacional e internacional que no son otros que los objetivos como la retribución, la prevención y la rehabilitación. El sistema de rehabilitación social es la mejor opción para tratar a una persona que ha cometido un delito; entonces, se puede consolidar una postura que sindica como única función o finalidad de las penas, aquella que traería como consecuencia la resocialización en función al cumplimiento de la sentencia, para cumplir la sanción y reciba un tratamiento adecuado para alcanzar ser reinsertado en la sociedad.

En la conminación, se aplica la función preventiva general de la pena, ya que se informa a la ciudadanía de la sanción penal que acarrearía la vulneración de bienes jurídicos. Mientras que, en la aplicación judicial, por un lado, el Estado reafirma su rol sancionador en pro de la protección de bienes jurídicos y, por otro, busca desincentivar al delincuente de la posibilidad de delinquir.

### Segunda:

Se ha logrado establecer en función a la descripción de la estructura de la política pública de lucha contra el crimen en el Perú, que las acciones estatales a través de la generación estratégica para la lucha contra el crimen no siempre ha sido bien calificada puesto que los índices de criminalidad no han tenido una reducción adecuada, En definitiva, se precisa puedan generar de manera idónea las acciones a seguir por la gestión.

Por lo cual resulta importante entender que se encuentra en la responsabilidad del propio Estado el hecho de que las medidas a tomar tengan una

relación directa con la identificación exacta de las causas que promueven los problemas sociales.

Que, de las actividades estatales que se han generado en función a un punto específico de la criminalidad, tal es el caso de las violaciones sexuales, que sin duda es de fácil verificación que los índices cada vez suben en el rango de medición anual, por ello será necesario reconocer que la políticas públicas utilizadas por el Estado están basadas en la realidad social , ya que la violación sexual es un crimen que afecta tanto a la integridad física como mental de las personas en las cuales es infligida, así como también sus relaciones sociales y familiares dependiendo de su contexto cultural.

Tercera:

Analizar la aplicación de las sanciones por el delito de violación sexual en el distrito judicial de Lambayeque y su efecto en los índices de criminalidad.

El análisis de la realidad como lo es el reconocimiento de la situación delincencial sumado a la verificación de las posturas de esta investigación por parte de los expertos, esto es la validación de su sentido; ha permitido corroborar que respecto al punto de la realidad jurisdiccional, es verificable la incidencia en casos de violación respecto de menores de edad, lo cual sin duda requiere de la especial atención del Derecho como regla de manera general.

De otro lado respecto a la validación de las posturas, se aprecia de los porcentajes obtenidos, el 84% de la población encuestada indica que está de acuerdo con el reconocimiento de un manejo adecuado del entendimiento sobre las políticas públicas.

El control de la actividad criminal se convierte en una obligación estatal, de allí la responsabilidad de generar una estrategia adecuada para la configuración de la política pública que permita con eficacia la acción limitativa no solo de los derechos a través de las sanciones sino que permita la prevención de la acción delictiva y como consecuencia de ello el equilibrio que proporciona la seguridad ciudadana.

Cuarta:

Luego de advertir la necesidad de implementar una política pública adecuada que se ocupe del control de la actividad criminal respecto a la violación sexual, en base a la determinación teórica sobre los fines de la pena que sólo logra la resocialización con la ejecución de la sanción y que dada la condición deficiente en la que se encuentra el sistema penitenciario; se ha logrado establecer que la forma más viable para lograr tal fin, sería la incorporación de la criminología como ciencia para lograr el reconocimiento del problema en la realidad, el cual será usado como punto de partida de la estrategia de control de la seguridad ciudadana.

El planteamiento requiere de la puntualización de parámetros específicos, que se relacionan en primer lugar con el sentido cultural para que el Estado intervenga de manera general para provocar cambios a ese nivel, luego el reconocimiento de la situación económica en el sector donde se producen este tipo de crímenes para las acciones correspondientes. Además de ello otro de los parámetros sería la verificación de los elementos psicológicos que permitieron la incorporación del consentimiento en el caso de violación de menores entre 14 y 18 años, tipo específico en el que se aprecia el nivel más alto de incidencia sobre esta acción criminal; siendo por último el parámetro social el que tendría que ser

revisado por el Estado para consolidar una política de origen de la intervención del derecho con acciones previas antes de la participación del ius puniendi.

## **Recomendaciones**

Primera:

Se sugiere al Estado peruano construir las estrategias de la Política Pública Criminal en base a estudios criminológicos a fin de reconocer el verdadero origen del delito e incorporar acciones que consigan efectos preventivos respecto a la aplicación del control de la criminalidad, logrando con ello un aporte a su eficacia; para lo cual deberán usarse mecanismos previos al ius puniendi.

Segunda:

Se recomienda la revisión específica del tipo penal de violación sexual en su modalidad de violación de menores de edad, puesto que hace falta incorporar en la política pública los lineamientos que otorgue la criminología como ciencia, respecto al análisis de los elementos psicológicos que permitieron la incorporación del consentimiento en el caso de violación de menores entre 14 y 18 años; con cuyos resultados se deberá direccionar la política pública fin de ejercer un control adecuado incluso sobre reglas existentes como esta.

## Bibliografía

- Alcalde Muñoz, E. J. (2007). *Apreciación de las características psicosociales de los violadores de menores*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado el 27 de Febrero de Febrero, de [http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1209/Alcalde\\_me\(1\).pdf;jsessionid=31ABBAF0633F31A1FF4861349DA97313?sequence=1](http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1209/Alcalde_me(1).pdf;jsessionid=31ABBAF0633F31A1FF4861349DA97313?sequence=1)
- Ávila Santamaría, R. (2008). *La rehabilitación no rehabilita, en ejecución penal y derechos humanos: una mirada crítica a la privación de la libertad*. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Bermúdez Soto, J. (1998). Elementos para definir las sanciones administrativas. *Revista Chilena de Derecho*, 12. Recuperado el 28 de Febrero de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2650036.pdf>
- Espinoza Bonifaz, A. (2017). Una nueva concepción de resocialización como fin de la pena . *IUS PUNIENDI*. N° 2, 119-131.
- Espinoza Mondragón, B. (2007). *Política criminal y prevención del delito hoy. Una propuesta de modelo de prevención para el municipio de León, basado en la participación ciudadana*. San José: Universidad Estatal a Distancia. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de <http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/969/1/Politica%20Criminal%20y%20Prevencion%20del%20Delito.pdf>

García Cavero, P. (2008). Acerca de la función de la pena. *Universidad de Piura*, 1-12.

Gómez Arias, R. D. (2012). Gestión de políticas públicas: aspectos operativos. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 223-236. Recuperado el 28 de Febrero de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/120/12023918011.pdf>

Gonzales Rodríguez, M., & Pérez Nájera, C. (2016). La política criminal y la seguridad ciudadana en Latinoamérica: Apreciaciones actuales. *International e-Journal of criminal science*, 24. Recuperado el 28 de Febrero de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6121871.pdf>

Harguindéguy, J.-B. (2017). *Análisis de Políticas Públicas*. Madrid: Tecnos.

Huaranga Chuco, O. M. (2016). *Violación sexual de menores de edad y sus consecuencias jurídicas y psicosociales en Huánuco*. Huánuco: Universidad de Huánuco. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de [http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/266/T\\_047\\_20882651\\_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/266/T_047_20882651_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019). *Perú: indicadores de violencia familiar y sexual, 2012-2019*. Lima: Dirección Genral INEI. Obtenido de [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1686/libro.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1686/libro.pdf)

Luzón Peña, D. (1976). *Problemas básicos del Derecho Penal*. Madrid.

- Medellín Torres, P. (2004). *La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad*. Santiago: CEPAL.
- Meza Lazo, A. (28 de Octubre de 2019). *Acerca de la función de la pena: teorías y fines*. Obtenido de IUS 360: <https://ius360.com/acerca-de-la-funcion-de-la-pena-teorias-y-fines/>
- Núñez del Prado, F. (2012). Definiendo la violación sexual en el derecho internacional: la contribución de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc. *Agenda Internacional*, 24. Recuperado el 28 de Febrero de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/agendainternacional/article/download/6260/6302/>
- Peres Neto, L. (2010). *Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España*. Barcelona: Universidad Autònoma de Barcelona. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de <https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2010/tdx-1222110-180745/lpn1de1.pdf>
- Pisfil Capuñay, M. (2006). Perspectivas del estado en el ejercicio de nuevas políticas públicas en el Perú. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM*, N° 29, 1-61.
- Ramos Vargas, A. A. (2017). *Influencia de los contextos familiares disfuncionales en la comisión de delitos sexuales intrafamiliares en la Región Tacna, 2012-2014*. Tacna: Universidad Privada de Tacna. Recuperado el 27 de Febrero de 2020, de <http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/381/1/Ramos-Vargas-Adelina-Asunta.pdf>

Rodríguez Delgado , J. (1999). *La reparación como sanción jurídico penal*. Lima: Editorial San Marcos.

Selmini Unibo, R. (2009). La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo. *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 17. Recuperado el 28 de Febrero de 2020, de [http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/381/2/images/Rossela\\_Selmini\\_Preencion\\_URVIO6.pdf](http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/381/2/images/Rossela_Selmini_Preencion_URVIO6.pdf)

Villavicencio Ferreros , F. (2006). *Derecho Penal Parte General*. Lima: Editorial Grijley.

## ANEXOS

### 1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



### TESIS

**“La política pública orientada al control criminal y la eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual”**

### CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

**I. Variable independiente: La política pública orientada al control criminal.**

1. Las políticas públicas son las estrategias que diseña el Estado con el fin de resolver determinado problema social a través de la potestad de control que posee.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.

2. El problema de las políticas públicas orientadas al control de la criminalidad se ocupa más de sancionar antes que de prevenir, además que no se forman en base a un estudio directo de la realidad.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
3. El origen de las estrategias que incorpora la política pública para ejercer control sobre los índices de criminalidad deben estar orientadas por los resultados que se obtengan del análisis de la realidad social creada por la criminología como ciencia.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.

**II. Variable dependiente: La eficacia de las sanciones por el delito de violación sexual.**

4. La eficacia de las sanciones se verifica a razón de los efectos retributivos respecto de la acción delictiva y los preventivos sobre la incidencia criminal.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.

5. Las sanciones existentes y aplicadas por el delito de violación sexual carecen de eficacia en razón de que no completan su efecto preventivo, dado que los índices de la criminalidad lejos de reducirse se incrementan.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
6. La aplicación de una estrategia de la política pública criminal basada en estudios criminológicos, permitirá que se logren efectos preventivos en la aplicación del control de la criminalidad por parte del Estado a través de las medidas y sanciones adecuadas.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgAwimpJuvrBKTGVjaJxp-5AGv1nqihpcpJwwjPbEtbEuvA/viewform?usp=sf\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgAwimpJuvrBKTGVjaJxp-5AGv1nqihpcpJwwjPbEtbEuvA/viewform?usp=sf_link)



Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque  
Gerencia de Administración Distrital  
Unidad de Servicios Judiciales

"Año de la Universalización de la Salud"

Chiclayo, 30 de Diciembre del 2020

**CARTA N° 000089-2020-USJ-GAD-CSJLA-PJ**



Firma  
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA  
MUÑOZ Lizeth Maria FAU  
20159981216.pdf  
Jefe De Unidad De Servicios  
Judiciales Casla  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.12.2020 15:34:39 -05:00

Señorita:

**MANAY DAVILA LEYDI LUCI** - DNI: 46696434

Calle Ollantay n.° 230, La Victoria

[leydi\\_16@outlook.com](mailto:leydi_16@outlook.com)

Presente.-

**Asunto** : Solicitud de acceso a la información pública.

**Referencia** : EXPEDIENTE000593-2020-USJ-GA

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, asimismo, dar respuesta a su solicitud formulada al amparo del TUO de la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante la cual solicitó información sobre "(...) 1. Cantidad de casos ingresados por el delito de violación sexual entre los años 2016-2020 en los juzgados unipersonales de la ciudad de Chiclayo; 2) cantidad de casos sentenciados por el delito de violación sexual entre los años 2016-2020 y 3) Copias simples de sentencias emitidas por el delito de violación sexual emitidas desde el 2016 al 2020".

Al respecto, a fin de atender su pedido se revisó el sistema de reportes del Sistema Integrado Judicial – SIJ adjuntándose al presente los reportes de los delitos por violación sexual del periodo 2016-2020 donde se observa el tipo penal, el juzgado en el que se tramitan y el estado de cada proceso. Respecto a las copias simples de sentencias le comunico que tendría que precisar de qué expediente exactamente requiere tal información debido a que, al tratarse de casos de violencia sexual, estos pueden afectar la intimidad y corresponde que la evaluación sobre la autorización de la entrega de información la realice la dependencia poseedora de la información que, para el caso, de expedientes judiciales en trámite es el magistrado a cargo del juzgado que conozca el expediente. En caso de expedientes archivados es el Archivo Central.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**LIZETH MARIA ARTEAGA MUÑOZ**

Jefe de Unidad de Servicios Judiciales CSJLA

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

LAM

